

Gaceta Departamental

EDICIÓN DE 66 PÁGINAS

No.18.948

Registrado en el Ministerio de Gobierno por Resol. No. 000474 de junio de 1967 - Tarifa postal reducida No. 2333 de la Admón Postal Nal. - Porte Pagado

SUMARIO RESOLUCIONES NOVIEMBRE 2011

| NUMERO | FECHA | PAGINA | NUMERO | FECHA | PAGINA |
|--------|----------------------|--------|--------|----------------------|--------|
| 042805 | Noviembre 18 de 2011 | 2 | 042819 | Noviembre 18 de 2011 | 36 |
| 042807 | Noviembre 18 de 2011 | 5 | 042820 | Noviembre 18 de 2011 | 43 |
| 042814 | Noviembre 18 de 2011 | 14 | 042821 | Noviembre 18 de 2011 | 48 |
| 042815 | Noviembre 18 de 2011 | 17 | 042822 | Noviembre 18 de 2011 | 52 |
| 042816 | Noviembre 18 de 2011 | 21 | 042823 | Noviembre 18 de 2011 | 58 |
| 042817 | Noviembre 18 de 2011 | 27 | 042896 | Noviembre 21 de 2011 | 64 |
| 042818 | Noviembre 18 de 2011 | 33 | 042897 | Noviembre 21 de 2011 | 65 |

RESOLUCIONES Noviembre de 2011



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA GENERAL
Imprenta Deptal. de Antioquia
Dr. Sergio Arroyave Maya
Director



**ORDEN AL MÉRITO
CÍVICO Y EMPRESARIAL
MARISCAL JORGE ROBLEDO
CATEGORÍA ORO**



RESOLUCIÓN

042805

(18 NOV 2011)

Por la cual se autoriza la ampliación del servicio a educación Media académica y se legalizan unos estudios en una institución Educativa oficial del Municipio de Puerto Berrío.

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, y

CONSIDERANDO QUE:

Mediante Resolución Departamental 0654 del 03 de febrero de 2003 se fusionó el Colegio Bomboná con la Escuela Urbana La Isla, constituyendo una sola Institución Educativa denominada INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BOMBONÁ", se concedió a la citada institución reconocimiento de carácter oficial y se le autorizó para impartir a partir del año 2003 Educación Formal en los niveles de Preescolar, Básica Ciclo Primaria, grados de primero a quinto; y Ciclo secundaria, grados de sexto a noveno, bajo una misma administración.

La Resolución Departamental 0654 del 03 de febrero de 2003 en su artículo cuarto dejó sin efectos los actos administrativos anteriores a ella y que definen su situación legal, entre los cuales esta la Resolución Departamental 2996 del 19 de abril de 2001, la cual concedió reconocimiento de carácter oficial a partir del año 2001 y le autorizó para la prestación del servicio educativo.

Es necesario ratificar la legalización del establecimiento educativo durante el tiempo en que ha prestado el servicio educativo, rectificando los efectos de la Resolución Departamental 0654 del 03 de febrero de 2003, para lo cual el rector del establecimiento educativo envió el oficio con radicado 201100107032 de julio 26 de 2011, solicitando la rectificación.

La Secretaría de Educación del Municipio de Puerto Berrío y la INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BOMBONÁ" mediante oficio con radicado 201100052770 de abril 12 de 2011, solicitaron la ampliación del servicio en el citado establecimiento educativo para la media académica, de acuerdo a estudio de factibilidad previamente realizado en la Comunidad Educativa.

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BOMBONÁ" se acogió a las directrices orientadas por la Secretaría de Educación de Antioquia, y reestructuró su Proyecto Educativo Institucional hacia el proceso exigido para la ampliación del servicio y solicitaron la visita de verificación y revisión de la documentación para el cumplimiento de los



requisitos legales con el fin de ofrecer Educación media académica y por tanto autorización para ampliar la prestación del servicio educativo a los grados diez y once.

De la visita realizada a la Institución Educativa “Bomboná” y luego del estudio y evaluación el Proyecto Educativo Institucional y de la documentación legal presentada por las directivas de la misma, se verificó la actualización de la concurrencia de los tres (3) requisitos de que trata el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, cuales son: el acto Administrativo por medio del cual se creó el establecimiento educativo de educación formal; la disposición de una estructura administrativa, de una planta física para la prestación del servicio y los medios educativos adecuados, y el ofrecimiento del Proyecto Educativo Institucional, que configuran en su conjunto, la existencia conceptual, jurídica y material de la institución educativa, y en consecuencia, la comisión de Supervisión emitió concepto favorable a la autorización solicitada.

Por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación de Antioquia, De conformidad con el Artículo 151 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, es función de las Secretarías Departamentales de Educación “aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de Educación Formal y Educación “No Formal”, denominada hoy “Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano” de acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero la Ley 1064 del 26 de julio de 2006.

De acuerdo con lo prescrito en el Artículo 6° de la Ley 715 de 2001, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, corresponde a los Departamentos organizar la prestación y administración del servicio educativo en su jurisdicción.

Según el Artículo 9° de la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, institución educativa es un conjunto de personas y de bienes promovidas por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Deberá contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.

El Colegio Bomboná fue creado mediante Resolución Municipal 2087 del 31 de julio de 1999, la cual convirtió la Escuela Urbana Bomboná en el Colegio del Mismo nombre.

Mediante Resolución Departamental 2996 del 19 de abril de 2001, se concedió reconocimiento de carácter oficial a partir del año 2001 al COLEGIO “BOMBONÁ”, y se autorizó para que en el mismo, se impartiera Educación Formal en los niveles de Preescolar, Básica Ciclo Primaria, grados de primero a quinto; y Ciclo secundaria, grados de sexto a noveno.

La Escuela Urbana La Isla fue creada mediante Ordenanza 21 del 28 de noviembre de 1959.



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Autorizar a la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BOMBONÁ"**, ubicada en la carrera 10 entre calles 20 y 21, Barrio Uribe Uribe y Carrera 3ª Barrio Puerto Colombia, Núcleo Educativo 203 del Municipio de Puerto Berrio, Departamento de Antioquia, para impartir a partir del año 2011 el nivel de Educación Media Académica.

Es un establecimiento educativo de carácter oficial, mixto, jornada diurna, calendario A, con plante física de propiedad del Municipio de Puerto Berrio y del orden administrativo Departamental.

PARÁGRAFO: La Junta Municipal de Educación, atendiendo a lo dispuesto en el literal "f" del Artículo 161 de la Ley 115 de 1994, contribuirá al control, a la inspección y a la vigilancia del establecimiento educativo, verificando entre otras cosas, la elaboración, archivo y conservación de los libros y documentos reglamentarios y muy en especial de los requeridos para legalización de los estudios y la expedición de certificados de los alumnos allí matriculados.

ARTÍCULO 3º. La **INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BOMBONÁ"**, podrá otorgar el título de BACHILLER ACADÉMICO, y expedir los diplomas correspondientes, según lo establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Artículo 11, numeral 2 del Decreto Nacional 1860 de 1994.

ARTÍCULO 4º. El establecimiento educativo deberá ajustar, siempre que sea necesario, el Proyecto Educativo Institucional P.E.I., según lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, los Decretos Nacionales 1860 de 1994 y 1290 de 2009 y las demás disposiciones que en adelante expidan el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Antioquia.

ARTÍCULO 5º. Para el cumplimiento del calendario académico y jornada escolar, la institución educativa deberá ceñirse a lo establecido en el Artículo 86º de la Ley 115 de 1994, y demás directrices impartidas por la Secretaría de Educación, con base en los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 6º. En la publicidad, material informativo y demás documentos que expida el establecimiento, se deberá citar, además, el número y la fecha de la presente resolución.

ARTÍCULO 7º. La presente resolución deberá notificarse personalmente quien ejerza la Rectoría de la institución Educativa.


ARTÍCULO 8º. Copia de la presente Resolución deberá fijarse en un lugar visible del establecimiento educativo.



ARTÍCULO 9°. Contra el presente Acto Administrativo, procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, o a la desfijación del correspondiente edicto, si es del caso.

ARTÍCULO 10°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE


HUMBERTO DÍEZ VILLA
Secretario de Educación de Antioquia

RESOLUCIÓN NÚMERO **042807** DE 2011

(18 NOV 2011)

"Por la cual se aprueba la financiación de subproyectos a las Instituciones Educativas y se autoriza la transferencia de los recursos para la financiación, con cargo a los recursos del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Media a las cuales les son aprobados los Subproyectos".

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas por el Decreto departamental 1325 del 26 de mayo de 2009 y el Decreto 4791 de 19 de diciembre de 2008, por la cual se reglamentan los Fondos de Servicios Educativos

CONSIDERANDO :

1. Que el Departamento de Antioquia, Secretaria de Educación de Antioquia, ha suscrito el convenio de Préstamo N° 7492, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF (Mundial), para financiar la implementación del Proyecto "Mejoramiento de la Educación Media en el Departamento de Antioquia".
2. Que el Decreto 4791 de Diciembre 19 de 2008, define que los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables creadas como un mecanismo de gestión presupuestal y ejecución de los recursos de los Establecimientos Educativos Estatales para la adecuada administración de sus recursos.
3. Que mediante el Decreto No 1325 de 26 de Mayo de 2009, le fueron delegadas a la Secretaría de Educación de Antioquia, las funciones para la ejecución del contrato de Empréstito No 7492-CO Departamento de Antioquia - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF.



4. Que en reunión del Comité Directivo del Proyecto Mejoramiento de la Educación Media, fueron aprobados los Subproyectos de las Instituciones Educativas que a continuación se señalan y se recomendó la financiación de los mismos con cargo a los recursos asignados al proyecto.
5. Que el monto del desembolso corresponde al treinta por ciento (30%) del total aprobado por subproyecto, una vez descontando el valor de los computadores y tableros digitales.

Que existe el CDP 3500021478 por un valor de tres mil millones de pesos \$ 3.000.000.000 para transferir a las instituciones Educativas como primer desembolso para la ejecución de los subproyectos aprobados por el proyecto de mejoramiento de la educación media y para lo cual existe aprobación contra la cual se puede ordenar gastos según los ítem y rubros mencionados a continuación. Ítem 1. Rubro A.51.3.3/1115/0-8050/120103000/021056 Crédito Externo Mejoramiento de Infraestructura educativa BM \$ 576.850.000; Ítem 2. Rubro A.51.7.2/1115/01010/120102000/021074 Fondos Comunes Aplicación de Proyecto Educativos Transversales BM \$1.000.000.000, Ítem 3. Rubro A.51.7.2/1115/0-1010/120102000/021068 FONDOS COMUNES planes institucionales de mejoramiento BM \$100.000.000 Ítem 4. Rubro A.

51.2.8/1115/0-1010/120104000/021003 FONDOS COMUNES Fortalecimiento Sistema Dptal Formación docentes Direct Otros Ag BM \$300.000.000 Ítem 5. Rubro A.51.7.2/1115/0-1010/120102000/021071 FONDOS COMUNES Proyec. Pedagógico Transvers Para Conviv Paz DHP Particip Resp. \$480.000.000 Ítem 6. Rubro A.51.7.2/1115/0-1010/120102000/021054 FONDOS COMUNES Avalúa -acción Mejoramiento Asesoría y Asistencia Técnica BM.\$543.150.000

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la financiación con cargo a los recursos del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Media de los Subproyectos presentados por las Instituciones Educativas y aprobados por el Comité Directivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la transferencia de los recursos para la financiación de los subproyectos a las Instituciones Educativas por los montos que posteriormente se señalan, recursos que deberán ser incorporados al Fondo de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas oficiales que a continuación se relacionan, con el objeto de implementar el subproyecto presentado y aprobado:

| Subregion | Municipio | I.E. EDUCATIVAS | Nit | Total aprobado | Valor descontar PC y tableros | Valor desembolso |
|-----------------|------------|------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Bajo Cauca | Nechí | IE la Concha | 900.176.969-1 | 68.490.000 | 21.000.000 | 14.247.000 |
| Bajo Cauca | Nechí | I. E. Jorge Eliécer Gaitán | 900.175.006-1 | 78.930.000 | 30.000.000 | 14.679.000 |
| Bajo Cauca | Zaragoza | I.E.R. Simón Bolívar | 811.024.235-1 | 79.425.000 | 23.600.000 | 16.747.500 |
| Bajo Cauca | Zaragoza | I.E.R. La Pajuela | 811.024.653-5 | 48.505.000 | 0 | 14.551.500 |
| Bajo Cauca | Zaragoza | I. E. Francisco De Paula Santander | 811.032.286-9 | 123.100.000 | 46.000.000 | 23.130.000 |
| Bajo Cauca | Zaragoza | I. E. Luis Fdo Restrepo R | 900.157.308-2 | 83.337.000 | 14.000.000 | 20.801.000 |
| Bajo Cauca | Zaragoza | I. E. Rural Nancy Rocío García | 811.025.525-5 | 69.040.000 | 14.000.000 | 16.512.000 |
| Bajo Cauca | Zaragoza | I. E. Santo Cristo De Zaragoza | 811.029.267-8 | 118.746.000 | 46.000.000 | 21.823.800 |
| Magdalena Medio | Pto Berrio | I.E America | 811.017.958-7 | 149.000.000 | 29.500.00 | 35.850.000 |



| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|---------------|-------------|------------|------------|
| Magdalena Medio | Puerto Nare | I.E.R. La Unión | 811.020.198-7 | 48.560.000 | 29.500.000 | 5.718.000 |
| Nordeste | Amalfi | I. E. Presbítero Gerardo Montoya | 811.023.555-7 | 110.840.000 | 29.500.000 | 24.402.000 |
| Nordeste | Amalfi | I. E. Pueblo Nuevo | 811.023.552-5 | 85.169.000 | 15.000.000 | 21.050.700 |
| Nordeste | Amalfi | I. E. Eduardo Fernández B | 811.024.125-8 | 113.535.000 | 37.000.000 | 22.960.500 |
| Nordeste | San Roque | I. E. Normal Superior De San Roque | 811.018.013-7 | 76.283.000 | 44.000.000 | 9.684.900 |
| Nordeste | San Roque | I. E. Presbítero Abraham Jaramillo | 811.018.008-1 | 78.075.000 | 14.000.000 | 19.072.500 |
| Nordeste | San Roque | I. E. R. Cristales | 811.018.113-6 | 41.330.000 | 20.000.000 | 6.399.000 |
| Nordeste | San Roque | I. E. R. Providencia | 811.040.503-6 | 47.375.000 | 21.500.000 | 7.762.500 |
| Nordeste | San Roque | I. E. R. San José Del Nus | 811.040.473-3 | 86.853.000 | 29.000.000 | 17.355.900 |
| Nordeste | Sto. Domingo | I. E. R. Botero | 811.031.275-3 | 64.324.000 | 37.000.000 | 8.197.200 |
| Nordeste | Sto. Domingo | I. E. R. Pedro Pablo Castrillón | 811.018.148-2 | 57.242.200 | 23.950.000 | 9.987.660 |
| Nordeste | Sto. Domingo | I. E. R. Purcesito | 811.019.327-9 | 77.460.000 | 37.000.000 | 12.138.000 |
| Nordeste | Sto. Domingo | I. E. R. Roberto López Gómez | 811.038.161-4 | 65.177.400 | 32.500.000 | 9.803.220 |
| Nordeste | Sto. Domingo | I. E. Tomas Carrasquilla | 811.039.794-0 | 65.944.000 | 37.000.000 | 8.683.200 |
| Nordeste | Vegachi | I. E. Efe Gómez | 811.022.829-5 | 95.425.000 | 44.500.000 | 15.277.500 |
| Nordeste | Vegachi | I. E. John F. Kennedy | 811.021.124-7 | 55.330.000 | 14.500.000 | 12.249.000 |
| Nordeste | Vegachi | I.E.R. El Cinco | 900.168.629-9 | 37.370.000 | 14.500.000 | 6.861.000 |
| Nordeste | Yolombó | I. E. Eduardo Aguilar | 811.019.131-2 | 96.815.000 | 59.500.00 | 11.194.500 |
| Nordeste | Yolombó | I. E. Escuela Normal Superior Del Nordeste | 811.019.740-8 | 77.506.500 | 44.500.000 | 9.901.950 |
| Nordeste | Yolombó | I. E. R. Guillermo Aguilar | 811.022.576-7 | 56.190.000 | 29.500.000 | 8.007.000 |
| Nordeste | Yolombó | I. E. R. La Floresta | 811.044.167-2 | 54.105.000 | 29.500.000 | 7.381.500 |
| Nordeste | Yolombó | I. E. R. Presbítero Eduardo Zuluaga | 811.044.086-4 | 70.310.000 | 29.500.000 | 12.243.000 |
| Norte | Angostura | I. E. Mariano De Jesús Eusse | 811.018.924-1 | 99.350.000 | 46.000.000 | 16.005.000 |
| Norte | Belmira | I.E.R. Labores | 811.029.902-7 | 65.300.000 | 30.000.000 | 10.590.000 |
| Norte | Briceño | I. E. Antonio Roldan Betancur | 811.018.144-3 | 89.850.000 | 32.000.000 | 17.355.000 |
| Norte | Carolina | I. E. Pbro. Julio Tamayo | 811.029.382-7 | 100.200.000 | 24.000.000 | 22.860.000 |
| Norte | Entreríos | I. E. Entreríos | 811.044.496-0 | 116.405.000 | 70.000.000 | 13.921.500 |
| Norte | Gómez Plata | I. E. Gómez Plata | 811.043.051-2 | 112.700.000 | 54.000.000 | 17.610.000 |
| Norte | Gómez Plata | I. E. R. El Salto | 811.043.057-6 | 83.875.000 | 30.000.000 | 16.162.500 |
| Norte | Guadalupe | I. E. Luis López De Mesa | 811.019.849-1 | 73.785.000 | 36.000.000 | 11.335.500 |
| Norte | Ituango | I. E. Jesús María Valle Jaramillo | 811.029.166-2 | 130.750.000 | 55.600.000 | 22.545.000 |



ANTIOQUIA - GACETA DEPARTAMENTAL

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|
| Norte | Ituango | I. E. Luis Maria Preciado Echavarría | 811.029.037-0 | 109.965.000 | 44.000.000 | 19.789.500 |
| Norte | Ituango | I. E. Pedro Nel Ospina | 811.044.131-8 | 94.980.000 | 65.000.000 | 8.994.000 |
| Norte | Ituango | I. E. R. José Félix de Rpo | 811.028.892-7 | 100.180.000 | 35.000.000 | 19.554.000 |
| Norte | San Andrés De Cuerquia | I. E. San Andrés | 811.038.689-0 | 96.360.000 | 32.000.000 | 19.308.000 |
| Norte | San Andrés De Cuerquia | I.R. Cruces | 900.387.884-1 | 76.634.000 | 30.000.000 | 13.990.200 |
| Norte | San José De La Montaña | I. E. Francisco Abel Gallego | 811.018.834-7 | 104.450.000 | 62.000.000 | 12.735.000 |
| Norte | Sta. Rosa De Osos | I.E. Marco Tobón Mejía | 900.371.924-6 | 148.500.000 | 89.000.000 | 17.850.000 |
| Norte | Valdivia | I. E. R. Marco A Rojo | 811.038.682-1 | 119.100.000 | 48.000.000 | 21.330.000 |
| Norte | Valdivia | I. E. Valdivia | 811.017.032-2 | 127.750.000 | 56.000.000 | 21.525.000 |
| Norte | Donmatías | I.E.R. Benilda Valencia | 811.024.857-0 | 60.600.000 | 29.500.000 | 9.330.000 |
| Norte | Donmatías | I.E.R. Pbro. Antonio José Cadavid Ch | 811.024.458-5 | 71.100.000 | 29.500.000 | 12.480.000 |
| Norte | San Pedro De Los Milagros | I.E. Padre Roberto Arroyave Vélez | 900.306.114-0 | 121.250.000 | 43.500.000 | 23.325.000 |
| Occidente | Abriaquí | I. E. La Milagrosa | 811.025.632-5 | 94.220.000 | 18.000.000 | 22.866.000 |
| Occidente | Anzá | I. E. Anzá | 811.019.146-2 | 110.570.000 | 34.000.000 | 22.971.000 |
| Occidente | Anzá | I.E. Asce. sión Montoya | 811.029.810-8 | 86.850.000 | 20.000.000 | |
| | | De Torres | | | | 20.055.000 |
| Occidente | Armenia | I. E. R. Técnica Agropecuaria La Herradura | 811.034.523-9 | 96.135.240 | 33.200.000 | 18.880.572 |
| Occidente | Armenia | I. E. Rosa Mesa De Mejía | 811.020.185-1 | 110.672.000 | 46.000.000 | 19.401.600 |
| Occidente | Dabeiba | I.E. Madre Laura Montoya | 811.040.297-3 | 68.525.000 | 37.000.000 | 9.457.500 |
| Occidente | Ebéjico | I. E. Presbítero Gabriel Yepes Yepes | 811.016.123-1 | 82.450.000 | 30.000.000 | 15.735.000 |
| Occidente | Ebéjico | I. E. R. Boyacá | 811.017.816-1 | 77.500.000 | 30.000.000 | 14.250.000 |
| Occidente | Ebéjico | I. E. R. Fátima | 811.024.949-1 | 88.090.000 | 30.000.000 | 17.427.000 |
| Occidente | Ebéjico | I. E. Urbana San José | 811.039.962-1 | 120.070.000 | 30.000.000 | 27.021.000 |
| Occidente | Ebéjico | I.E.R. La Primavera | 811.027.028-5 | 81.150.000 | 37.000.000 | 13.245.000 |
| Occidente | Frontino | I. E. Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez | 811.025.326-6 | 98.550.000 | 38.000.000 | 18.165.000 |
| Occidente | Frontino | I. E. Manuel Antonio Toro | 811.026.102-8 | 97.350.000 | 34.000.000 | 19.005.000 |
| Occidente | Frontino | I. E. Pedro Antonio Elejalde | 811.025.410-7 | 108.340.000 | 14.000.000 | 28.302.000 |
| Occidente | Frontino | I. E. R. Gabriela White De Vélez | 811.028.697-7 | 99.905.000 | 24.000.000 | 22.771.500 |
| Occidente | Frontino | I. E. R. Nobogacita | 811.029.325-7 | 102.040.000 | 26.000.000 | 22.812.000 |
| Occidente | Frontino | I. E. R. La Blanquita De Murri | 900.157.471-5 | 123.400.000 | 30.000.000 | 28.020.000 |



| | | | | | | |
|-----------|--------------|--|---------------|-------------|------------|------------|
| Occidente | Frontino | I. E. Las Mercedes | 811.029.719-5 | 87.725.000 | 29.500.000 | 17.467.500 |
| Occidente | Giraldo | I. E. Luis Andrade Valderrama | 811.043.912-9 | 105.700.000 | 34.000.000 | 21.510.000 |
| Occidente | Heliconia | I. E. R. Alto Del Corral | 900.240.812-8 | 71.330.000 | 25.200.000 | 13.839.000 |
| Occidente | Heliconia | I. E. R. Héctor Higinio Bedoya Vargas | 811.019.775-5 | 72.188.000 | 17.600.000 | 16.376.400 |
| Occidente | Heliconia | I. E. San Rafael | 811.013.520-7 | 100.455.000 | 33.600.000 | 20.056.500 |
| Occidente | Olaya | I. E. Llanadas | 811.020.248-7 | 86.524.000 | 38.000.000 | 14.557.200 |
| Occidente | Olaya | I. E. Olaya | 811.021.032-8 | 88.714.000 | 39.600.000 | 14.734.200 |
| Occidente | Olaya | I. E. R. El Pencal | 811.020.184-4 | 83.414.000 | 30.000.000 | 16.024.200 |
| Occidente | San Jerónimo | I. E. Esc Nor Sup Genov | 811.039.005-8 | 74.900.000 | 32.000.000 | 12.870.000 |
| Occidente | San Jerónimo | I. E. R. Agrícola De San Jerónimo | 811.039.368-6 | 90.170.000 | 32.000.000 | 17.451.000 |
| Occidente | San Jerónimo | I. E. R. Benigno Mena | 900.077.607-6 | 70.790.000 | 33.200.000 | 11.277.000 |
| Occidente | Sopetrán | I. E. Escuela Normal Superior Santa Teresita | 811.019.977-6 | 101.770.000 | 28.000.000 | 22.131.000 |
| Occidente | Sopetrán | I. E. José María Villa | 811.040.340-2 | 96.550.000 | 14.000.000 | 24.765.000 |
| Occidente | Sopetrán | I. E. R. Horizontes | 811.020.015-8 | 102.264.000 | 28.000.000 | 22.279.200 |
| Occidente | Sopetrán | I.E. Santa Bárbara | 811.019.494-0 | 91.560.000 | 24.000.000 | 20.268.000 |
| Oriente | Abejorral | I.E.Esc Sup Abejorral | 811.015.434-0 | 41.810.000 | 0 | 12.543.000 |
| Oriente | Abejorral | I. E. Func Celia Duque | 811.006.541-2 | 98.845.000 | 29.500.000 | 20.803.500 |
| Oriente | Abejorral | I. E. Manuel Canuto Restrepo | 811.031.799-0 | 48.580.000 | 15.000.000 | 10.074.000 |
| Oriente | Abejorral | I. E. Pedro Pablo Ramírez | 811.020.853-3 | 49.380.000 | 14.500.000 | 10.464.000 |
| Oriente | Abejorral | I. E. R. De Pantanillo | 811.039.075-3 | 68.695.000 | 14.500.000 | 16.258.500 |
| Oriente | Abejorral | I. E. R. Zoila Duque Baena | 900.116.600-3 | 58.840.000 | 14.500.000 | 13.302.000 |
| Oriente | Alejandria | I. E. Procesa Delgado | 811.020.918-3 | 93.530.000 | 21.000.000 | 21.759.000 |
| Oriente | Argelia | I. E. Santa Teresa | 900.014.445-1 | 106.150.000 | 44.500.000 | 18.495.000 |
| Oriente | Cocorná | I. E. R.(Eva Tulia Quintero Toro) | 811.018.231-6 | 78.847.500 | 19.200.000 | 17.894.250 |
| Oriente | Cocorná | I.E Cocorná | 811.018.082-5 | 113.245.000 | 46.000.000 | 20.173.500 |
| Oriente | Concepción | I. E. Presbítero Libardo Aguirre | 811.020.919-0 | 96.940.000 | 34.800.000 | 18.642.000 |
| Oriente | El Peñol | I. E. León XIII | 811.021.953-6 | 86.930.000 | 15.000.000 | 21.579.000 |
| Oriente | El Peñol | I. E. Palmira | 811.021.952-9 | 60.195.600 | 22.000.000 | 11.458.680 |
| Oriente | El Retiro | I. E. Dr. Luis Eduardo Posada | 811.018.760-0 | 59.650.000 | 37.000.000 | 6.795.000 |
| Oriente | El Retiro | I. E. Ignacio Botero Vallejo | 811.018.430-5 | 76.720.000 | 44.000.000 | 9.816.000 |
| Oriente | El Retiro | I. E. Dolores Ismael Restrepo | 811.040.135-9 | 84.470.000 | 29.500.000 | 16.491.000 |

| | | | | | | |
|----------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| Oriente | El Retiro | I. E. Nacianceno Peláez | 811.020.503-0 | 73.580.000 | 29.500.000 | 13.224.000 |
| Oriente | Guarne | I.E.R Piedras Blancas | 811.025.102-3 | 92.180.000 | 44.000.000 | 14.454.000 |
| Oriente | Guarne | I.E.R Hojas Anchas | 900.291.159-4 | 85.700.000 | 38.000.000 | 14.310.000 |
| Oriente | Guarne | I.E.R Ezequiel Sierra | 900.314.821-3 | 100.550.000 | 33.200.000 | 20.205.000 |
| Oriente | Guarne | I. E. Inmaculada Concepción | 890.980.790-3 | 98.420.000 | 44.000.000 | 16.326.000 |
| Oriente | Guarne | I. E. R. Chaparral | 811.039.826-8 | 91.830.000 | 38.000.000 | 16.149.000 |
| Oriente | Guarne | I. E. Rorr al | 811.040.164-2 | 85.100.000 | 29.000.000 | 16.830.000 |
| Oriente | Guarne | I. E. Santo Tomas De Aquino | 811.018.354-3 | 108.900.000 | 62.000.000 | 14.070.000 |
| Oriente | Guatapé | I. E. Nuestra Señora Del Pilar | 811.021.321-1 | 53.030.000 | 15.000.000 | 11.409.000 |
| Oriente | La Unión | I. E. Félix María Restrepo Londoño | 811.039.759-2 | 97.510.000 | 46.000.000 | 15.453.000 |
| Oriente | La Unión | I. E. Marco Emilio López Gallego | 811.042.039-9 | 70.850.000 | 20.000.000 | 15.255.000 |
| Oriente | La Unión | I. E. Pio Xi | 811.017.464-0 | 88.510.000 | 36.000.000 | 15.753.000 |
| Oriente | Nariño | I. E. Inmaculada Concepción | 811.016.276-8 | 70.850.000 | 38.000.000 | 9.855.000 |
| Oriente | Nariño | I. E. Puerto Venus | 811.015.262-0 | 99.350.000 | 37.000.000 | 18.705.000 |
| Oriente | San Carlos | I. E. Joaquín Cárdenas Gómez | 811.024.186-7 | 94.295.000 | 37.500.000 | 17.038.500 |
| Oriente | San Carlos | I. E. R. El Jordán | 900.016.841-2 | 61.980.000 | 22.000.000 | 11.994.000 |
| Oriente | San Carlos | I. E. R. Palmichal | 900.059.240-0 | 67.005.000 | 22.000.000 | 13.501.500 |
| Oriente | San Carlos | I. E. Rural Puerto Garza | 900.067.069-0 | 65.790.000 | 29.500.000 | 10.887.000 |
| Oriente | San Luis | I. E. Alta Vista | 900.150.949-1 | 68.225.000 | 30.000.000 | 11.467.500 |
| Oriente | San Luis | I. E. San Luis | 811.040.524-0 | 131.100.000 | 54.000.000 | 23.130.000 |
| Oriente | San Luis | I. E. R. La Josefina | 900.221.162-8 | 95.650.000 | 46.000.000 | 14.895.000 |
| Oriente | San Luis | I. E. R. E Prodigio | 811.038.195-4 | 88.225.000 | 30.000.000 | 17.467.500 |
| Oriente | San Rafael | I. E. San Rafael | 811.021.218-0 | 108.610.000 | 44.500.000 | 19.233.000 |
| Oriente | San Vicente | I. E. Corrientes | 811.022-458-6 | 72.160.000 | 34.000.000 | 11.448.000 |
| Oriente | San Vicente | I. E. La Magdalena | 811.020.924-8 | 92.832.500 | 44.000.000 | 14.649.750 |
| Oriente | San Vicente | I. E. Rural Chaparral | 811.022.819-1 | 99.100.000 | 40.000.000 | 17.730.000 |
| Oriente | San Vicente | I. E. San Vicente Ferrer | 811.021.722-1 | 85.600.000 | 30.000.000 | 16.680.000 |
| Oriente | San Vicente | I. E. Santa Rita | 811.020.923-0 | 113.389.000 | 44.000.000 | 20.816.700 |
| Suroeste | Amaga | I. E. Escuela Normal Superior Amaga | 811.015.695-6 | 83.900.000 | 30.000.000 | 16.170.000 |
| Suroeste | Amaga | I. E. Pascual Correa Flórez | 811.018.517-7 | 133.190.000 | 52.000.000 | 24.357.000 |
| Suroeste | Amaga | I. E. R. La Ferrería | 800.256.824-3 | 115.870.000 | 52.000.000 | 19.161.000 |
| Suroeste | Amaga | I. E. San Fernando | 890.981.421-5 | 105.436.000 | 30.000.000 | 22.630.800 |



| | | | | | | |
|----------|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|
| Suroeste | Angelopolis | I. E. R. Los Angeles | 811.015.994-3 | 113.650.000 | 44.500.000 | 20.745.000 |
| Suroeste | Angelopolis | I. E. San José | 900.044.489-1 | 76.950.000 | 30.000.000 | 14.085.000 |
| Suroeste | Betulia | I. E. Francisco Cesar | 900.208.313-1 | 73.150.000 | 33.200.000 | 11.985.000 |
| Suroeste | Betulia | I. E. San José | 811.019.307-1 | 93.376.000 | 46.000.000 | 14.212.800 |
| Suroeste | Caramanta | I. E. Juan Pablo Gómez Ochoa | 811.035.077-1 | 96.300.000 | 46.000.000 | 15.090.000 |
| Suroeste | Caramanta | I.E.R. Alegrias | 811.035.076-2 | 79.500.000 | 30.000.000 | 14.850.000 |
| Suroeste | Concordia | I. E. De Jesús | 811.023.023-0 | 90.200.000 | 30.000.000 | 18.060.000 |
| Suroeste | Fredonia | I.E.R Piedra Verde | 811.030.270-2 | 87.950.000 | 22.000.000 | 19.785.000 |
| Suroeste | Fredonia | I.E.R. Palomos | 811.043.769-1 | 97.325.000 | 29.500.000 | 20.347.500 |
| Suroeste | Fredonia | I. E. De Minas | 900.025.802-3 | 91.000.000 | 29.500.000 | 18.450.000 |
| Suroeste | Fredonia | I. E. Efe Gómez | 811.040.391-8 | 100.750.000 | 14.500.000 | 25.875.000 |
| Suroeste | Fredonia | I. E. Escuela Normal Superior Mariano Ospina Rodríguez | 890.980.821-3 | 79.150.000 | 29.500.000 | 14.895.000 |
| Suroeste | Fredonia | I. E. Llano Grande | 811.030.352-8 | 84.750.000 | 29.500.000 | 16.575.000 |
| Suroeste | Fredonia | I. E. R. Murrapal | 811.030.755-3 | 102.000.000 | 37.000.000 | 19.500.000 |
| Suroeste | Jericó | I. E. Escuela Normal Superior De Jericó | 890.981.143-2 | 140.500.000 | 117.000.000 | 7.050.000 |
| Suroeste | Jericó | I. E. R. (I. E. R. San Francisco De Asís) | 900.082.675-7 | 62.900.000 | 42.800.000 | 6.030.000 |
| Suroeste | Jericó | I. E. San José | 811.031.219-0 | 100.120.000 | 42.800.000 | 17.196.000 |
| Suroeste | La Pintada | I. E. La Pintada | 811.039.787-9 | 61.730.000 | 14.000.000 | 14.319.000 |
| Suroeste | La Pintada | I. E. Rafael Uribe Uribe | 900.029.190-2 | 83.785.000 | 37.000.000 | 14.035.500 |
| Suroeste | Montebello | I. E. Mariano J. Villegas | 811.020.058-4 | 58.620.000 | 15.000.000 | 13.086.000 |
| Suroeste | Salgar | I. E. Julio Restrepo | 811.020.306-6 | 80.950.000 | 46.000.000 | 10.485.000 |
| Suroeste | Salgar | I. E. Abelardo Ochoa | 811.020.376-1 | 57.590.000 | 16.000.000 | 12.477.000 |
| Suroeste | Sta. Bárbara | I. E. Damasco | 811.039.294-1 | 59.884.000 | 29.500.000 | 9.115.200 |
| Suroeste | Sta. Bárbara | I. E. El Guayabo | 811.099.336-5 | 81.384.000 | 29.500.000 | 15.565.200 |
| Suroeste | Sta. Bárbara | I. E. Jesús María Rojas | 811.018.403-6 | 119.884.000 | 44.500.000 | 22.615.200 |
| Suroeste | Sta. Bárbara | I. E. Tomas Eastman | 811.018.979-6 | 102.884.000 | 44.500.000 | 17.515.200 |
| Suroeste | Sta. Bárbara | I. E. Versailles | 811.022.436-4 | 76.234.000 | 22.500.000 | 16.120.200 |
| Suroeste | Titiribí | I. E. Benjamín Correa A | 900.001.845-6 | 43.000.000 | 14.500.000 | 8.550.000 |
| Suroeste | Titiribí | I. E. Santo Tomas De Aquino | 811.032.334-4 | 112.354.000 | 30.000.000 | 24.706.200 |
| Suroeste | Urrao | I. E. Escuela Normal Superior Sagrada Familia | 811.030.949-4 | 91.800.000 | 54.000.000 | 11.340.000 |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|---------------|-------------|------------|------------|
| Suroeste | Urrao | I. E. Monseñor J. Iván Cadavid Gutiérrez | 811.030.253-7 | 99.050.000 | 46.000.000 | 15.915.000 |
| Suroeste | Urrao | I. E. R. Jaipera | 811.031.686-7 | 96.750.000 | 54.000.000 | 12.825.000 |
| Suroeste | Urrao | I. E. R. Valentina Figueroa | 811.032.366-1 | 86.500.000 | 33.200.000 | 15.990.000 |
| Suroeste | Valparaiso | I. E. Rafael Uribe Uribe | 811.033.424-3 | 87.350.000 | 42.800.000 | 13.365.000 |
| Urabá | Carepa | I. E. R. Villa Nelly | 811.019.101-1 | 87.480.000 | 44.000.000 | 13.044.000 |
| Urabá | Apartado | I.E.R. El Diamante | 811.023.282-1 | 70.940.000 | 34.000.000 | 11.082.000 |
| Urabá | Arboletes | I.E.R. Guadual Arriba | 811.033.447-2 | 76.110.000 | 14.000.000 | 18.633.000 |
| Urabá | Arboletes | I.E.R. Santa Fe De Las Platas | 811.042.232-4 | 107.255.000 | 36.000.000 | 21.376.500 |
| Urabá | Arboletes | I. E. R. Buenos Aires | 900.122.990-5 | 86.080.000 | 34.000.000 | 15.624.000 |
| Urabá | Arboletes | I. E. Arboletes | 811.019.240-7 | 103.975.000 | 44.000.000 | 17.992.500 |
| Urabá | Arboletes | I. E. José Manuel Restrepo | 900.075.788-1 | 80.720.000 | 10.000.000 | 21.216.000 |
| Urabá | Arboletes | I. E. R. E. Carmelo | 811.024.225-6 | 90.595.000 | 36.000.000 | 16.378.500 |
| Urabá | Arboletes | I. E. R. La Candelaria | 811.022.581-4 | 84.960.000 | 30.000.000 | 16.488.000 |
| Urabá | Arboletes | I. E. R. La Trinidad | 811.036.221-9 | 119.020.000 | 44.000.000 | 22.506.000 |
| Urabá | Arboletes | I. E. R. Pajillal | 811.031.264-2 | 93.700.000 | 22.000.000 | 21.510.000 |
| Urabá | Necoclí | I.E.R. Mello Villavicencio | 900.070.262-7 | 98.790.000 | 44.000.000 | 16.437.000 |
| Urabá | Necoclí | I.E.R. Mulatos | 811.043.627-4 | 86.790.000 | 48.000.000 | 11.637.000 |
| Urabá | Necoclí | I.E.R. La Comarca | 811.042.197-4 | 107.873.000 | 44.000.000 | 19.161.900 |
| Urabá | Necoclí | I.E.R. San Sebastián De Urabá | 811.027.582-4 | 81.910.000 | 34.000.000 | 14.373.000 |
| Urabá | Necoclí | I.E.R. Tulapita | 811.044.996-1 | 94.480.000 | 38.000.000 | 16.944.000 |
| Urabá | Necoclí | I. E. Antonio Roldan Betancur | 811.040.631-0 | 93.570.000 | 44.000.000 | 14.871.000 |
| Urabá | Necoclí | I. E. Eduardo Espitia Romero | 811.030.635-1 | 103.800.000 | 30.000.000 | 22.140.000 |

PARAGRAFO 1: Previo a la iniciación del proceso de ejecución del subproyecto aprobado, el ordenador del gasto de la Institución Educativa beneficiada deberá hacer entrega a quien ejerza la función de interventor, por parte de la Secretaría de Educación de Antioquia, de una carpeta que contenga los siguientes documentos: NIT del establecimiento, fotocopia de la cédula de ciudadanía del ordenador del gasto, certificado bancario reciente donde conste el número y nombre de la cuenta donde se manejan los recursos, la cual deberá tener el carácter de exclusiva para el manejo de los recursos que se transfieren con cargo al Proyecto Mejoramiento de La Educación Media, fotocopia de la póliza de manejo del Ordenador del Gasto y Asesor Financiero, Acto Administrativo del Administrador de los recursos adicionando al presupuesto los recursos asignados y Visto bueno por parte del interventor.

PARAGRAFO 2: Las inversiones se harán exclusivamente para la financiación de lo establecido en el Sub Proyecto presentado por la Institución Educativa y aprobado mediante el acto anteriormente mencionado.

PARAGRAFO 3: Transferir a los Fondos de Servicios Educativos de la Institución Educativa Carlos Arturo Duque NIT 811.020.168-6, el monto total del subproyecto aprobado a la Institución Educativa Unión de Puerto Nare NIT 811.020.198-7 del municipio de Puerto Nare, previa aprobación del Convenio Interadministrativo suscrito entre ambas instituciones y que tendrá vigencia hasta el momento en que la institución educativa Puerto Nare constituya su propio Fondo de Servicio Educativos o realice la inversión aprobada en el subproyecto.

PARAGRAFO 4, transferir a los Fondos de servicio educativo Institución Educativa León XIII (del Municipio del Peñol) NIT 811.021.953-6, el monto total del subproyecto aprobado a la Institución Educativa Palmira (del Municipio del Peñol) NIT 811.021.952-9, previa aprobación del Convenio Interadministrativo suscrito entre ambas instituciones y que tendrá vigencia hasta el momento en que la institución educativa Palmira del Municipio del Peñol constituya su propio Fondo de Servicios Educativos o realice la inversión aprobada en el subproyecto

PARAGRAFO 5 Transferir a los Fondos de Servicios Educativos de la Institución Educativa Olaya (Municipio De Olaya) NIT 811.021.032-8, el monto total del subproyecto aprobado a la Instituciones Educativa El Pencal (del Municipio de Olaya) NIT 811.020.184-4, previa aprobación del Convenio Interadministrativo suscrito entre ambas instituciones y que tendrá vigencia hasta el momento en que la institución educativa Pencal del Municipio de Olaya, constituya su propio Fondo de Servicios Educativos o realice la inversión aprobada en el subproyecto.

PARAGRAFO 6 Transferir a los Fondos de Servicios Educativos de la Institución Educativa F. Gómez (del municipio de Vegachi) con NIT 811.022.829-5, el monto total del subproyecto aprobado a la Institución Educativa El Cinco (del municipio de Vegachi) NIT900.168.629-9. Previa aprobación del Convenio Interadministrativo suscrito entre ambas instituciones y que tendrá vigencia hasta el momento en que la institución educativa El cinco del Municipio de Vegachi, constituya su propio Fondo de Servicios Educativos o realice la inversión aprobada en el subproyecto.

PARAGRAFO 7 Transferir a los Fondos de Servicios Educativos de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina NIT 811.044.131-8, el monto total del subproyecto aprobado a la Institución Educativa José Félix Restrepo de Ituango con NIT 811.028.892-7 previa aprobación del Convenio Interadministrativo suscrito entre ambas instituciones y que tendrá vigencia hasta el momento en que la institución educativa José Félix Restrepo del Municipio de Ituango, constituya su propio Fondo de Servicios Educativos o realice la inversión aprobada en el subproyecto.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su comunicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los:

18 NOV 2011



HUMBERTO RUIZ VILLA
Secretario de Educación de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 042814

18 NOV 2011

Por medio de la cual se decide un recurso

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, Las leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008 y Resolución N° 23483 de la Gobernación de Antioquia y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo reglamentado en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995 y a las Resoluciones 10911 de 1.992 y 1478 de 2006, del Ministerio de la Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 8 de octubre de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección a la droguería **Drogas D Pauly**, ubicada en la Calle 40 H N°42A-30 del municipio de Envigado Antioquia, cuyo **Propietaria** era la señora **Mónica María Osorio Zuleta** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.815.580 y su **Director Responsable** el señor **Carlos Augusto Muriel Cuartas** identificado con cédula de ciudadanía N° 98.546.900 y con Credencial de Expendedor de Drogas inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N°2670.

Que mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 8352 de junio 20 de 2011, se inició la investigación, y el 12 de julio mediante Auto N° 8472 se formularon cargos a los implicados, en sus calidades de **Propietario y Director Responsable** de la droguería **Drogas D Pauly**

Que analizado el merito del sumario y los argumentos planteados y las pruebas aportadas en los descargos presentados, mediante **Resolución N° 25248 de 12 de Septiembre de 2011** se sancionó a la señora Mónica María Osorio Zuleta y el señor Carlos Augusto Muriel Cuartas con multas equivalentes a VEINTE (20) **SMDLV** para cada uno individualmente.

Que debidamente notificada la decisión, los implicados interpusieron contra ésta, **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN**, dentro del término de ley.

Para resolver se tiene lo siguiente,

Dentro de la sustentación de los recursos interpuestos los implicados manifiestan haber tomado las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la normatividad sanitaria dentro del establecimiento farmacéutico y se comprometen a seguir cumpliendo, para lo cual solicitan se practique una nueva visita a la droguería, visita que fue solicitada también dentro de los descargos y posteriormente rechazada mediante Auto de Pruebas N° 21416 del 11 al considerarse como ciertas las afirmaciones planteadas por los involucrados en relación a haber corregido las irregularidades evidenciadas el día de la visita y que dieron origen a la presente investigación.

El hecho que la señora Mónica María Osorio Zuleta y el señor Carlos Augusto Muriel Cuartas, hayan asumido su responsabilidad frente a las irregularidades presentadas en el establecimiento, no significa que no se les sancionara por ello, teniendo en cuenta que los productos farmacéuticos se encontraron en condiciones que atentan contra la salud, el bienestar y la vida de la comunidad. Además este aspecto se tuvo en cuenta como factor atenuante al momento de imponer la sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 del Decreto 677 de 1995; al igual que el hecho que no hubiesen sido investigados o sancionados anteriormente.

Se indica que la presente investigación se adelantó respetando el principio constitucional del debido proceso, de acuerdo a los lineamientos de los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, respetando desde sus inicios el derecho a la defensa; es así como desde la notificación de los cargos a los implicados, expresamente se les advirtió de acuerdo al artículo 118 del Decreto 677 de 1995, que gozaban de un término de diez (10) días hábiles para presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que sean conducentes para su defensa y que además tenía derecho a hacerse asistir de un abogado.

En un aparte de la resolución recurrida se les indica claramente que las irregularidades evidenciadas en la droguería, constituyen conductas que están debidamente tipificadas como infracciones a la normatividad sanitaria vigente, y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa se hace acreedor de una sanción.

En cuanto a la sanción monetaria, este Despacho indica que la misma resulta equitativa en relación con los significativos hallazgos y con el límite traído por el artículo 125 del Decreto 677 de 1995, literal b), el cual indica que puede aplicarse ***"Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES"***.

La Corte Constitucional en Sentencia T-381 de septiembre 14 de 1993, analizando el principio de Inocencia y el de la Buena Fe, determinó:

“...el principio de la Buena Fe, (C:N: art. 83) en efecto no consiste en que el Estado deba someterse sin análisis ni posibilidad de evaluación a lo afirmado por los particulares. Implica sí que las autoridades presuman – juris tantum – que las personas actúan ante ellas de buena fe, pero siempre con la posibilidad correlativa de desvirtuar la presunción, con arreglo a derecho, exigiendo entonces las consiguientes responsabilidades por violación de la Constitución o de las leyes...”

No existen fundamentos entonces, ni de hecho ni de derecho, para modificar en modo alguno las determinaciones adoptadas mediante la resolución recurrida, por lo que no habrá de reponerse, y se concederá el recurso de apelación ante el Señor Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución N° 25248 de 12 de Septiembre de 2011 por las consideraciones realizadas en la parte motiva de ésta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: En el efecto suspensivo, se concede el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al de reposición.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al recurrente y/o su apoderado, y en caso de no ser posible su localización, se ordena desde ahora su notificación por edicto.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 18 NOV 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia



RESOLUCIÓN N° 042815**18 NOV 2011****Por medio de la cual se impone una sanción****El Director Administrativo de la Dirección Factores De Riesgo de la
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 14 de septiembre de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Tienda Naturista Salud Verde de la bomba** ubicada en la Calle 13 N°9-87 del municipio de Nariño Antioquia, cuya **Propietario** es el señor **Rodrigo Alberto Henao Pérez** identificado con cédula de ciudadanía N° 98.456.045.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 21551 de agosto 19 de 2011 se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° 22032 de septiembre 20 de 2011 contra el señor Rodrigo Alberto Henao Pérez, en su calidad de **Propietario** de la **Tienda Naturista Salud Verde de la bomba**, por infringir el artículo 4 numeral 2 de la **Resolución 5109 de 2005** y artículo 272 de la **Ley 9 de 1979**, artículo 39 literal d) del **Decreto 219 de 1998**, artículo 14, 44 parágrafo 3º y 45 literales g) y j) del **Decreto 2266 de 2004** y artículo 6 numerales 1 Literales a), c), f), j) y k) y 2 Literal i) de la **Resolución 126 de 2009**

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al señor **Rodrigo Alberto Henao Pérez**, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que el señor , quien no acudió a notificarse personalmente, fue notificado por edicto y no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que mediante Auto de Pruebas N° 22722 del 31 de octubre de 2011 fueron aceptadas como pruebas dentro de la presente investigación los documentos allegados por el implicado junto con sus descargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas cuatro mil quinientas ochenta y dos (4.582) unidades de treinta y cinco (35) productos farmacéuticos diferentes, tales como:

- **Fraudulentos:** Extranjeros, sin registro sanitario del INVIMA y se evidenció que adquiría productos a proveedores no autorizados.
- **Que Incumplían las Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques:** alimento con indicaciones terapéuticas, sin clasificación, sin número de lote y sin sistema de seguridad en sus tapas.

Todos estos productos fueron decomisados como medida sanitaria de seguridad, y se dejó copia del acta levantada con ocasión de la visita.

Al respecto, el artículo 45 del Decreto 2266 de 2004, hace referencia al contenido de las etiquetas y empaques de los productos fitoterapéuticos tradicionales, estableciendo claramente que los productos fitoterapéuticos tradicionales deberán contener, según literales g) y j): *Número de registro sanitario y Número de lote*; respectivamente.

Además es responsabilidad precisamente de quienes a ello se dedican, no sólo adquirir los productos y medicamentos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización ya que lo que está de por medio es la salud pública, el bienestar colectivo y la propia vida de quienes requieren los medicamentos prescritos por sus médicos para el alivio o la cura de sus diversas dolencias o enfermedades.

En cuanto a los productos sin registro sanitario, se les recuerda que dicho registro, es el Documento Público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en la normatividad sanitaria, por lo tanto los productos que no cuentan con éste y encontrados son fraudulentos y está prohibida su tenencia.

Es importante resaltar que la información de la fecha de vencimiento y lote, la llevan en el empaque, rótulo y etiqueta, al carecer de esta información son motivo de decomiso y además puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación, etc., de productos farmacéuticos.

ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS

El implicado dentro de los descargos argumenta que pensó que los proveedores a los cuales les adquiere estaban autorizados para lo cual anexa facturas de venta.

Reconoce la comercialización de productos sin registro sanitario pero afirma que desde la visita no ha seguido comercializando este tipo de productos y que ya cumplió con todos los requisitos dejados por los funcionarios de ésta Secretaría, anexa copia de las últimas visitas, lo cual es tenido en cuenta como factor atenuante al momento de imponer la sanción de conformidad con lo estipulado con el artículo 122 del Decreto 677 de 1995.

Igualmente asegura que muchos de los incumplimientos obedecieron a ignorancia en cuanto a la normatividad sanitaria.

Este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***"implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen"***.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que *"toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"*.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *"la prevalencia del interés general"*, y *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios".

Por otra parte, el artículo 9º del Código Civil Colombiano, establece que ***"La ignorancia de la ley no sirve de excusa"***. Y en tal sentido, en uno de los múltiples pronunciamientos que sobre éste aspecto ha hecho la H. Corte Suprema

de Justicia, en sentencia de Sala Plena de marzo 30 de 1978, señaló que *"Excluír de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico"*. Se ha hecho ésta reseña legislativa para concluir que bajo ninguna circunstancia le asiste justificación alguna al implicado para pretender evadir su responsabilidad en los hechos.

Tener productos fraudulentos y que incumplan Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, en muchos de ellos ni siquiera se encuentra un solo medicamento en condición irregular, ni son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener en un establecimiento farmacéutico medicamentos y productos en las condiciones en que se encontraron en la **Tienda Naturista Salud Verde de la bomba** del municipio de Nariño, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Rodrigo Alberto Henao Pérez** identificado con cédula de ciudadanía N° 98.456.045, en sus calidades de **Propietario** de la **Tienda Naturista Salud Verde de la bomba** ubicada en la Calle 13 N°9-87 del municipio de Nariño Antioquia, con **MULTA** equivalente a **CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** al momento de regir la presente resolución. valor que deberá ser cancelado a favor

del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.


ARTÍCULO CUARTO: El sancionado deberá asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se le estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándole que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

18 NOV 2011

Expedida en Medellín a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 042816

18 NOV 2011

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FACTORES DE RIESGO
DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 20 de enero de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visitas oficiales de inspección y vigilancia a la droguería **Drogas La Bastilla** ubicada en la Calle 51 N°48 03 del municipio de Medellín Antioquia, de propiedad de la sociedad **Inversiones Mar Angel Ltda.** cuyo **Representante Legal** es el señor **Evaristo Antonio García Mesa** identificado con cédula de ciudadanía N° 70.042.313, o quien haga sus veces y su **Director Responsable** el señor **Yeny Yohana Osorno Ramírez** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.017.134.145 y con Título de Tecnóloga en Regencia de Farmacia inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 5-3988-08.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 6162 de junio 01 de 2011 se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° 8726 de agosto 03 de 2011 contra el señor Evaristo Antonio García Mesa, o quien haga sus veces y la señora Yeny Yohana Osorno Ramírez en sus calidades de **Representante Legal y Directora Responsable** de la droguería **Drogas La Bastilla**, por infringir los artículos 69 y 77 parágrafos 1º y 2º del **Decreto 677 de 1995**, numerales 3.3 literal g) 3.6.5 y 5.3 literal f) del Capítulo II Título II del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado mediante **Resolución 1403 de 2007**.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al señor Evaristo Antonio García Mesa, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que la señora Yeny Yohana Osorno Ramírez, quien no acudió a notificarse personalmente, fue notificada por edicto y no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas mil novecientos seis (1.906) unidades de sesenta y cuatro (64) medicamentos y productos farmacéuticos diferentes, tales como:

- **Medicamentos Prohibidos:** Vencidos y muestras médicas
- **Medicamentos Alterados:** Con el sistema de seguridad en la tapa alterado y medicamentos fraccionados.

Estos productos fueron decomisados como medida sanitaria de seguridad, y se dejó copia del acta levantada con ocasión de la visita.

Al respecto, los párrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*“PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades públicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.*

*“PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA** o **VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS O ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos”.*

Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2° párrafo 2, establece que **MEDICAMENTO** “es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”.

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le de un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección de buen manejo y cuidado en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdichan mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la droguería Drogas La Bastilla.

Con respecto a los medicamentos fuera de su empaque (“caja original”), se está desconociendo con ello el literal d) del artículo 2° del Decreto 677 de 1995, que define como **medicamento alterado**: cuando el empaque no corresponda al autorizado o se hubiere sustraído del original, total o parcialmente y que medicamento no solo es su parte constitutiva sino que “...Los envases, rótulos,

etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado", de acuerdo a la definición de éste en el artículo 2º del Decreto 677 de 1995.

Adicionalmente las estanterías se encontraban sucias lo cual compromete al calidad de los medicamentos.

Sin embargo, resulta relevante para este despacho la visita de verificación realizada el 11 de octubre de 2010 en donde pudo observarse el cumplimiento de algunos de los requerimientos dejados por los funcionarios como la limpieza en las estanterías, la proporcionalidad de los medicamentos, se documentó el plan de contingencia, cuentan con hojas de vida de los equipos, certificados de calibración y mantenimiento, no se encontraron vencidos. Sin embargo fueron decomisados (2) productos por no contar con sistema de seguridad y un (1) producto por no tener fecha de vencimiento ni número de lote, equivalentes a once (811) unidades.

ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS

El representante legal manifiesta dentro de los descargos que la señora Yenny Yohana Osorno no se encuentra laborando en el establecimiento actualmente y que por tal motivo no firmó el escrito de descargos, por lo que los argumentos allí planteados sólo serán tenidos en cuenta para la sociedad y no para la directora responsable.

Asegura que los medicamentos vencidos se encontraban separados, lo que corresponde con lo evidenciado por los funcionarios durante la visita y de lo cual se dejó constancia tanto en el acta de visita y decomiso como en el auto de cargos.

En cuanto a los demás productos que incumplían con la normatividad sanitaria, afirma el representante legal que los mismo no se encontraban para la venta y que estaban a la espera de ser devueltos a los proveedores, por lo que también solicita tener en cuenta lo verificado en visita realizada el 11 de octubre de 2010 en donde pudo evidenciarse el cumplimiento de la normatividad sanitaria dentro del establecimiento, frente a lo cual es pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Decreto 677 de 1995, será tenido en cuenta como factor atenuante al momento de resolver la presente investigación..

Este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***"implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen"***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano

viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a **todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que "toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"**.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *"la prevalencia del interés general"*, y *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios" (Negrilla fuera de texto).

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, en muchos de ellos ni siquiera se encuentra un solo medicamento en condición irregular, ni son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la sociedad **Inversiones Mar Angel Ltda.** cuyo **Representante Legal** es el señor **Evaristo Antonio García Mesa** identificado con cédula de ciudadanía N° 70.042.313, o quien haga sus veces y a la señora **Yeny Yohana Osorno Ramírez** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.017.134.145 y con Título de Tecnóloga en Regencia de Farmacia inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 5-3988-08, en sus calidades de **Representante Legal y Directora Responsable** respectivamente de la droguería **Drogas La Bastilla** ubicada en la Calle 51 N°48 03 del municipio de Medellín Antioquia, con **AMONESTACIÓN** y conminarlos igualmente a dar estricto cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente dentro de los establecimientos farmacéuticos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Los sancionados deberán asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 18 NOV 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS

**Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia**

RESOLUCIÓN N° 042817

18 NOV 2011

Por medio de la cual se impone una sanción

**El Director Administrativo de La Dirección Factores de Riesgo de La
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 6 de agosto de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Droguería Scott** ubicada en la Calle 50 Nª78 A 02 del municipio de Medellín Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Luz Irlez Pulgarin Bedoya** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.801.689 y su **Director Responsable** la señora **Nelly Pulgarin Bedoya** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.434.202 y con Credencial de Expendidora de Drogas inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 2276.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 8410 de junio 28 de 2011 se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° 21766 de septiembre 02 de 2011 contra las señoras Luz Irlez Pulgarin Bedoya, y Nelly Pulgarin Bedoya en sus calidades de **Propietaria y Directora Responsable**

de la **Droguería Scott**, por infringir los artículos 13, 72 literales b) y e) y 77 parágrafos 1º y 2º del **Decreto 677 de 1995**, literal b) numeral 3: del artículo 8 de la **Resolución 1403 de 2007**, numerales 3.2. Literales i) y j), 3.3. literal g), 3.6.5, 5.3 Literales c) y f) del Capítulo II Título II, numerales 1.5.1 Literal d) y 1.5.3, Inciso final numeral 2.1., literal d) numeral 2.2 Capítulo V Título I del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado mediante **Resolución 1403 de 2007**, artículo 20 numerales 3 y 6 del **Decreto 2200 de 2005**, artículo 5 numeral 1 literal d) y numeral 3 del **Decreto 2330 de 2006** y artículo 54 literal d) del **Decreto 4725 del 2005**

Que las señoras Luz Irlez Pulgarin Bedoya, y Nelly Pulgarin Bedoya, quienes no acudió a notificarse personalmente, fue notificadas por edicto y no presentaron sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas doscientas cincuenta y dos (252) unidades de treinta y seis (36) medicamentos y productos farmacéuticos diferentes, tales como:

- **Medicamentos Prohibidos:** Vencidos, muestras médicas, con pseudofedrina.
- **Medicamentos Fraudulentos:** Con las etiquetas enmendadas, sin registro sanitario del INVIMA y se evidenció que adquiría productos a proveedores no autorizados.
- **Medicamentos Alterados:** con el sistema de seguridad alterado y mal almacenados en la nevera con alimentos.
- **Medicamentos que Incumplían las Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques:** Sin laboratorio fabricante y sin número de lote.

Todos estos productos fueron decomisados como medida sanitaria de seguridad, y se dejó copia del acta levantada con ocasión de la visita.

Al respecto, los parágrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*“PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades públicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.*

*“PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA** o **VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS** O **ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos”.*

Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2º parágrafo 2, establece que **MEDICAMENTO** “es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios

activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnostico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”.

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le de un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección, de buen manejo y cuidado en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdican mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la Droguería Scott

Además es responsabilidad precisamente de quienes a ello se dedican, no sólo adquirir los productos y medicamentos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización ya que lo que está de por medio es la salud pública, el bienestar colectivo y la propia vida de quienes requieren los medicamentos prescritos por sus médicos para el alivio o la cura de sus diversas dolencias o enfermedades.

En cuanto al servicio de inyectología, lo que se busca es el ejercicio de una práctica adecuada de la inyectología, para lo cual se requiere: el personal idóneo, el cual se acredita por medio del Certificado de Inyectología, expedido por una institución avalada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la dotación de todos los implementos necesarios para garantizar la asepsia y una correcta aplicación de los medicamentos evitando riesgos; la Resolución 1164 de 2002, del Ministerio de Salud y Ministerio del Medio Ambiente, implemento el manual de procedimiento para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, establece además la aplicación del código de colores y por ende el uso de recipientes reutilizables, (canecas) y bolsas plásticas desechables, al igual que guardianes de seguridad para los elementos cortopunzantes.

Dentro del servicio de inyectología se observó que no contaba con jabon liquido ni con toallas desechables, así como tampoco con las normas de limpieza y desinfección ni con el manual de procedimientos.

En cuanto a los medicamentos sin registro sanitario, se les recuerda que dicho registro, es el Documento Público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en el Decreto 677 de 1995, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expendir los medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza

y otros productos de uso doméstico, por lo tanto los productos que no cuentan con éste y encontrados son fraudulentos y está prohibida su tenencia. **Artículo 2º y 77 parágrafo 2º del Decreto 677 de 1995.**

Es importante resaltar que la información de la fecha de vencimiento y lote, la llevan en el empaque, rótulo y etiqueta y que los que estaban fuera del empaque secundario, al carecer de esta información son motivo de decomiso y además puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación, etc., de medicamentos.

Adicionalmente, las condiciones higiénico locativas del establecimiento tampoco eran las adecuadas toda vez que se evidenciaron las siguientes irregularidades:

- No tenía exhibido el horario de atención al público.
- Faltaban estibas.
- Las áreas no estaban identificadas y señalizadas
- La unidad sanitaria se encontraba en mal estado.
- Las estanterías se encontraron sucias lo cual compromete la calidad de los medicamentos.
- No se medían las variables de temperatura y humedad relativa.

Así como tampoco se tenían documentados los proceso y procedimientos adelantados en el establecimiento farmacéutico.

Resulta relevante además para este despacho el hecho que durante le visita se observara que la directora responsable fumaba dentro del establecimiento, actividad que sólo esta permitido según la legislación nacional, en los espacios abiertos, mucho más cuando se trata de una droguería, pues como es obvio es un establecimiento dedicado a la comercialización de medicamentos y productos para la higiene y salud de la población.

Este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***"implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen"***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a

todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que *"toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"*.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *"la prevalencia del interés general"*, y *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."*

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Tener productos farmacéuticos prohibidos, alterados, fraudulentos, que incumplan normas de calidad en etiquetas, rótulos y empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, sin importar la cantidad que sea, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, en muchos de ellos ni siquiera se encuentra un solo medicamento en condición irregular, ni son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a las implicadas que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que

someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener en un establecimiento farmacéutico medicamentos y productos en las condiciones en que se encontraron en la **Droguería Scott** del municipio de Medellín, **pone en riesgo y en grave peligro la salud pública** que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a las señoras **Luz Irlez Pulgarin Bedoya** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.801.689 y **Nelly Pulgarin Bedoya** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.434.202 y con Credencial de Expendedora de Drogas inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 2276, en sus calidades de **Propietaria y**

Directora Responsable respectivamente de la **Droguería Scott** ubicada en la Calle 50 N°78 A 02 del municipio de Medellín Antioquia, con **MULTAS** equivalentes a **TREINTA (30) Y TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** al momento de regir la presente resolución respectivamente, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a las implicadas, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Las sancionadas deberán asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una

sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

18 NOV 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 042818

18 NOV 2011

Por medio de la cual se decide un recurso

El Director Administrativo de La Dirección Factores De Riesgo De La
Secretaría Seccional De Salud Y Protección Social De Antioquia

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, Las leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008 y Resolución N° 23483 de la Gobernación de Antioquia y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo reglamentado en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995 y a las Resoluciones 10911 de 1.992 y 1478 de 2006, del Ministerio de la Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 1 de febrero de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección a la **Droguería Médica Sanaser**, ubicada en la Carrera 3A Sur Calle 5 Barrio Arabia del municipio de Caucasia Antioquia, cuyo **Propietario** era la señora **Eduardo Antonio Arboleda Z.** identificado con cédula de ciudadanía N° 70.035.948.

Que mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 3848 de noviembre 18 de 2010, se inició la investigación, y el 02 de febrero de 2011 mediante Auto de Cargos N° 257 se formularon cargos a el implicado, en su calidad de **Propietario de la Droguería Médica Sanaser**.

Que analizado el merito del sumario y los argumentos planteados y las pruebas aportadas en los descargos presentados, mediante **Resolución N° 21457 de 26 de julio de 2011** se sancionó a el señor **Eduardo Antonio Arboleda Z.**, con multa equivalente a **CINCUENTA (50) SMDLV**.

Que debidamente notificada la decisión, el señor **Eduardo Antonio Arboleda Z.** interpuso contra ésta, **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN**, dentro del término de ley.

Para resolver se tiene lo siguiente,

Dentro de la sustentación de los recursos el implicado argumenta que los medicamentos vencidos se encontraban en una estantería de vencimiento y averías y no en la estantería de venta al público, por lo que se hace necesario recordarle al señor Arboleda que los productos vencidos o las averías deben ser predestruidos y depositados en la bolsa y recipiente rojo indicado para este tipo de residuos y no en una estantería del establecimiento como se encontraron en el momento de la visita, independientemente de que la estantería sea de venta al público o no, los funcionarios deben aplicar el decomiso como medida sanitaria de seguridad de conformidad con lo estipulado en la normatividad sanitaria que prohíbe la tenencia o venta de productos vencidos en los establecimientos farmacéuticos y con el fin de proteger la salud de la población usuaria de la droguería (**Artículo 77 parágrafos 1° y 2° del Decreto 677 de 1995**).

Asegura el implicado que ha sido víctima de persecuciones por algunos de los funcionarios de ésta Secretaría, frente a lo cual es pertinente aclararle que cada uno de los funcionarios que realizan las visitas de inspección y vigilancia a los diferentes establecimientos de competencia de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, lo hace en cumplimiento estricto de las normas y dentro de los parámetros establecidos en la ley para este tipo de actividades, sin embargo se llevaran a cabo las respectivas investigaciones en relación a lo mencionado.

En cuanto a la credencial de expendedor de drogas se reitera que, la misma se otorga en cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y de acuerdo con los tramites determinados para tal fin, como claramente se le ha indicado en diferentes oportunidades.

Se indica que la presente investigación se adelantó respetando el principio constitucional del debido proceso, de acuerdo a los lineamientos de los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, respetando desde sus inicios el derecho a la defensa; es así como desde la notificación de los cargos a los implicados, expresamente se les advirtió de acuerdo al artículo 118 del Decreto 677 de 1995, que gozaban de un término de diez (10) días hábiles para presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que sean conducentes para

su defensa y que además tenía derecho a hacerse asistir de un abogado.

En ningún momento han sido violados por parte de la Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia, ni principios ni derechos, toda vez que el señor **Eduardo Antonio Arboleda Z.**, fue sancionado conforme a las normas sanitarias vigentes, con recaudación de prueba real y verdadera (acta de visita y decomiso) y con observancia plena y propia del proceso Administrativo Sancionatorio.

Por lo anterior, no le asiste justificación alguna para pretender evadir su responsabilidad en los hechos, toda vez que en un aparte de la resolución recurrida se le indica claramente que dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones a la normatividad sanitaria vigente, y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa se hace acreedor de una sanción.

En cuanto a la sanción monetaria, este Despacho indica que la misma resulta equitativa en relación con los significativos hallazgos y con el límite traído por el artículo 125 del Decreto 677 de 1995, literal b), el cual indica que puede aplicarse **"Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES"**.

La Corte Constitucional en Sentencia T-381 de septiembre 14 de 1993, analizando el principio de Inocencia y el de la Buena Fe, determinó:

"...el principio de la Buena Fe, (C:N: art. 83) en efecto no consiste en que el Estado deba someterse sin análisis ni posibilidad de evaluación a lo afirmado por los particulares. Implica sí que las autoridades presuman – juris tantum – que las personas actúan ante ellas de buena fe, pero siempre con la posibilidad correlativa de desvirtuar la presunción, con arreglo a derecho, exigiendo entonces las consiguientes responsabilidades por violación de la Constitución o de las leyes..."

Esos son los motivos por las cuales no se modificará la decisión adoptada señalando, que el implicado no aportó ni solicitó pruebas que demostraran su ausencia de responsabilidad en los hechos investigados, o circunstancia alguna que atenuara o disminuyera su responsabilidad en los mismos, disponiéndose su remisión al Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para que desate el recurso de **apelación** interpuesto como subsidiario del de reposición.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución N° 21457 de 26 de julio de 2011 por las consideraciones realizadas en la parte motiva de ésta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: En el efecto suspensivo, se concede el recurso de



apelación interpuesto subsidiariamente al de reposición.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al recurrente y/o su apoderado, y en caso de no ser posible su localización, se ordena desde ahora su notificación por edicto.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

18 NOV 2011

Expedida en Medellín a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 042819

18 NOV 2011

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FACTORES DE RIESGO
DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 01 de febrero de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la droguería **Drogas Super**

Economía Caucasia ubicada en la Calle 20 Con Carrera 13 Esquina del municipio de Caucasia Antioquia, de propiedad de la sociedad **Depósito Principal de Drogas Ltda.** cuyo **Representante Legal** es el señor **Juan Méndez Muñoz** identificado con cédula de ciudadanía N° 19324710, o quien haga sus veces, y su **Director Responsable** el señor **Yonis Miguel Jiménez Manga** identificado con cédula de ciudadanía N° 15669190 y con Credencial de Expendedor de Drogas inscrito en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 2821.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 1896 de Mayo 02 de 2011 se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° 8354 de junio 20 de 2011 contra el señor Juan Méndez Muñoz, o quien haga sus veces y Yonis Miguel Jiménez Manga en sus calidades de **Representante Legal y Director Responsable** de la droguería **Drogas Super Economía Caucasia**, por infringir el artículo 77 parágrafos 1° y 2° del **Decreto 677 de 1995**, artículo 8 numeral 2, numeral 3.2 Literales i) y j), numeral 5.3 literal c) y numeral 3.6.5 Capítulo II Título II del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado mediante **Resolución 1403 de 2007**, artículo 20 numeral 3 del **Decreto 2200 de 2005**, artículo 14 del **Decreto 2266 de 2004**.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente al señor Yonis Miguel Jiménez Manga, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual no presentó los respectivos descargos dentro del término de ley, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que el señor Juan Méndez Muñoz, o quien hace sus veces, no acudió a notificarse personalmente, fue notificado por conducta concluyente, toda vez que presentó sus descargos, dentro del término de la ley, haciendo efectivo su derecho de defensa.

Que mediante Auto de pruebas N° 21773 del 02 de Septiembre de 2011 se rechazó la practica de una nueva visita al establecimiento farmacéutico y que fue solicitada por el representante legal de la sociedad dentro de sus descargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas mil cuarenta y ocho (1.048) unidades de setenta y tres (73) productos farmacéuticos diferentes, tales como:

- **Prohibidos:** Vencidos.
- **Fraudulentos:** Sin registro sanitario del INVIMA
- **Alterados:** Mal almacenados, a temperatura superior a la recomendada.

Estos productos fueron decomisados como medida sanitaria de seguridad, y se dejó copia del acta levantada con ocasión de la visita.

Al respecto, los parágrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*"PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades públicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.*

*"PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA** o **VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS O ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos".*

Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2° parágrafo 2, establece que MEDICAMENTO "es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado".

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le de un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección, de buen manejo y cuidado en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdichan mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria del establecimiento.

En cuanto al servicio de inyectología, lo que se busca es el ejercicio de una práctica adecuada de la inyectología, para lo cual se requiere: el personal idóneo, el cual se acredita por medio del Certificado de Inyectología, expedido por una institución avalada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la dotación de todos los implementos necesarios para garantizar la asepsia y una correcta aplicación de los medicamentos evitando riesgos; la Resolución 1164 de 2002, del Ministerio de Salud y Ministerio del Medio Ambiente, implemento el manual de procedimiento para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, establece además la aplicación del código de colores y por ende el uso de recipientes reutilizables, (canecas) y bolsas plásticas desechables, al igual que guardianes de seguridad para los elementos cortopunzantes.

En cuanto a los productos sin registro sanitario, se les recuerda que dicho registro, es el Documento Público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en la normatividad sanitaria, por lo tanto los productos que no cuentan con éste y encontrados son fraudulentos y está prohibida su tenencia.

Adicionalmente, las condiciones higiénico locativas del establecimiento tampoco eran las adecuadas ya que se evidenciaron las siguientes irregularidades:

- Faltaban estibas.
- Las estanterías no eran suficientes
- El establecimiento estaba desorganizado, le faltaba limpieza.
- Las estanterías estaban sucias lo cual compromete la calidad de los medicamentos.
- Los basureros no contaban con bolsa plástica.
- Los rangos de temperatura ambiental de refrigeración y de humedad relativa superaban los límites permitidos.
- No se garantizaban las condiciones de almacenamiento recomendadas por el fabricante

Resulta relevante para este despacho el hecho de que en visita anterior efectuada el 25 y 26 de noviembre de 2008 se le encontraron las mismas irregularidades en cuanto a las condiciones locativas y al mal manejo de los medicamentos motivo por el cual se le dejaron requerimientos para dar cumplimiento a la normatividad sanitaria situación que no ha acatado de acuerdo a lo evidenciado por los funcionarios el día 01 de febrero de 2010.

Así como la queja interpuesta el 01 de abril de 2009 ante ésta Secretaría en la cual se informaba que “la mayoría de farmacias y droguerías del municipio no cumplen con la normatividad de director responsable como el cumplimiento del horario laboral y además el personal que labora no se encuentra capacitado y no tienen el conocimiento necesario.”, in formación que fue verificada en la visita realizada a la droguería toda vez que se pudo evidenciar la tenencia de productos que incumplen con la normatividad sanitaria.

ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS

El representante legal de la sociedad, propietaria de la droguería dentro del escrito de descargos manifiesta que el director responsable si cumple con funciones, que los productos vencidos estaban identificados y separados. Frente a lo cual es pertinente señalar que como se dijo en apartes anteriores es indispensable el estricto cumplimiento de las funciones del director responsable con el fin de no detectar ninguna irregularidad dentro del establecimiento y que ponen en riesgo la salud de la población usuaria de la droguería.

En relación a los fitoterapéuticos sin registro argumenta que tales productos si pueden ser fabricados por Fersan, de acuerdo con su naturaleza, por lo que dice anexar la certificación del mismo, la cual no fue allegada al proceso y adicionalmente, el producto decomisado corresponde a una Tintura de Riubarbo solución por 23ml y como fabricante Químicos Colombia y no Fersan.

En cuanto al producto mal almacenado asegura que éste fue retirado de su área para mostrarlo a un cliente, así como también afirma haber comprado estibas y que las estanterías si son suficientes.

Frente a la limpieza del establecimiento manifiesta el representante que se encontraba limpio y que ésta afirmación obedece a una apreciación del funcionario que practicó la visita, para lo cual solicita se realice una nueva visita ala droguería, la cual fue rechazada según lo argumentado dentro del Auto de Pruebas N° 21773 del 02 de Septiembre de 2011.

Este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***"implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen"***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que ***"toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"***.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la ***"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."*** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en ***"la prevalencia del interés general"***, y ***"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."***

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios" (Negrilla fuera de texto).

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Tener productos farmacéuticos prohibidos, alterados, fraudulentos, además que algunos se encontraran mal almacenados, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Es de relatar que mediante Resolución N° 002279 del 24 de enero de 2011, el señor Yonis Miguel Jiménez Manga fue sancionado en su calidad de director responsable de la Droguería El Remate; sanción que consistió en la imposición de una multa de diez (10) SDMLV, lo que resulta relevante para este despacho al momento de imponer la sanción, toda vez, que el señor Jiménez Manga muestra renuencia al cumplimiento de la normatividad sanitaria ya que fue emitido nuevamente concepto desfavorable al establecimiento a su cargo después de haber sido sancionado por la ésta Secretaría

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, en muchos de ellos ni siquiera se encuentra un solo medicamento en condición irregular, ni son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener en un establecimiento farmacéutico medicamentos y productos en las condiciones en que se encontraron en la droguería **Drogas Super Economía Caucasia** del municipio de Caucasia, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la sociedad **Depósito Principal de Drogas Ltda.** cuyo **Representante Legal** es el señor **Juan Méndez Muñoz** identificado con cédula de ciudadanía N° 19324710, o quien haga sus veces y al señor **Yonis Miguel Jiménez Manga** identificado con cédula de ciudadanía N° 15669190 y con Credencial de Expendedor de Drogas inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 2821, en sus calidades de **Propietaria y Directora Responsable** respectivamente de la droguería **Drogas Super Economía Caucaasia** ubicada en la Calle 20 Con Carrera 13 Esquina del municipio de Caucaasia Antioquia, con **MULTAS** equivalentes a **CIEN (200) Y CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** respectivamente, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Los sancionados deberán asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 18 NOV 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS

Director Administrativo Factores de Riesgo

Secretaria Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 042820

18 NOV 2011

Por medio de la cual se impone una sanción

**El Director Administrativo de La Dirección Factores de Riesgo de La
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 12 de Mayo de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la droguería **Farmasalud Campamento** ubicada en la Calle 11 N°10 13 del municipio de Campamento Antioquia, de propiedad de la sociedad **Farmasalud Ltda** cuyo **Representante Legal** es el señor **Gustavo Enrique Rios Bru** identificado con cédula de ciudadanía N° 6.888.925, o quien haga sus veces, y su **Director Responsable** el señor **Edier León Loaza Jaramillo** identificado con cédula de ciudadanía N° 15.274.636 y con Título de Tecnólogo en Regencia de Farmacia inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 5-1908-10.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 21738 de septiembre 02 de 2011 se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° 22295 de octubre 04 de 2011 contra los señores Gustavo Enrique Rios Bru, o quien haga sus veces y Edier León Loaza Jaramillo en sus calidades de **Representante Legal y Director Responsable** de la droguería **Farmasalud Campamento**, por infringir los artículos 66, 67 literal f), 68 del **Decreto 1950 de 1964**, Literales f) y K) numeral 3.2 capítulo II Título II, Inciso final numeral 2.1 literal d), numeral 2.2 Capítulo V Título I del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado mediante **Resolución 1403 de 2007**, artículo 4 numerales 2 y 10 de la **Resolución 1403 de 2007** y artículo 4 de la **Resolución 010911 de 1992**

Dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándoles de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentaron los respectivos descargos fuera del término de ley, es decir después de transcurridos los diez (10) días hábiles establecidos en la normatividad sanitaria para tal fin, motivo por el cual no pueden ser tenidos en cuenta al momento de resolver la presente investigación.

Para resolver se tiene lo siguiente:

El 11 de mayo de 2011 se recibe en la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, **queja** de la comunidad del municipio de Campamento en donde se informa que el establecimiento no cuenta con todos los medicamentos para su atención especialmente para la hipertensión y algunos antibióticos.

Información que fue verificada por los funcionarios que practicaron la visita, en donde pudo observarse que los usuarios se acercaban al establecimiento solicitando los medicamentos prescritos por el facultativo para tratamientos continuos, promoción y prevención ante lo cual el director técnico respondía que no tenía disponibles. Algunos de los usuarios se habían desplazado en semanas o días anteriores para el suministro de sus tratamientos y que tampoco habían sido entregados.

Adicionalmente, se observó que dentro de los medicamentos pendientes por entregar se encontraban productos que requieren refrigeración y el establecimiento no contaba con nevera para la adecuada conservación de los mismos.

Las condiciones higiénico locativas del establecimiento tampoco eran las adecuadas toda vez que pudieron evidenciarse las siguientes irregularidades:

- No tenía exhibido el horario de atención al público.
- No todas las áreas se encontraban delimitadas y señalizadas.
- No cumplía con el código de colores en recipientes y bolsas plásticas.
- La iluminación era deficiente.
- Carecía de aviso exterior.
- No tenía contrato para la disposición final de los residuos.
- Los basureros no contaban con bolsa plástica.

Así como tampoco se garantizaban las condiciones de almacenamiento recomendadas por el fabricante ni se conservaba la cadena de frío para aquellos medicamentos que requerían refrigeración

El establecimiento no contaba con el Certificado de distancia al establecimiento minorista más cercano, expedido por Planeación municipal y que es requerido para todos los establecimientos farmacéuticos minoristas.

Durante la visita y de acuerdo con la situación encontrada el establecimiento fue **clausurado** como medida sanitaria de seguridad, la cual fue levantada el 24 de mayo de 2011.

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le de un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección, de buen manejo y cuidado en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdican mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la droguería Farmasalud Campamento.

Al respecto, este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***"implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen"***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que *"toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"*.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *"la prevalencia del interés general"*, y *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera



expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios".

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener un establecimiento farmacéutico en las condiciones en que se encontraba la drogeuría **Farmasalud Campamento** del municipio de Campamento, **pone en riesgo y en grave peligro la salud pública** que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar la sociedad **Farmasalud Ltda** cuyo

Representante Legal es el señor **Gustavo Enrique Rios Bru** identificado con cédula de ciudadanía N° 6.888.925, o quien haga sus veces y al señor **Edier León Loaza Jaramillo** identificado con cédula de ciudadanía N° 15.274.636 y con Título de Tecnólogo en Regencia de Farmacia inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 5-1908-10, en sus calidades de **Propietaria y Director Responsable** respectivamente de la **Farmasalud Campamento** ubicada en la Calle 11 N°10-13 del municipio de Campamento Antioquia, con **MULTAS** equivalentes a **CIENTO CINCUENTA (150) Y VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** respectivamente, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Los sancionados deberán asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

18 NOV 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS

Director Administrativo Factores de Riesgo

Secretaria Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 042821

Por medio de la cual ^{18 NOV 2011} se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FACTORES DE RIESGO
DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que los días 30 de Junio de 2010 y 14 de abril de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visitas oficiales de inspección y vigilancia a la **Clinica Veterinaria Caracas** ubicada en la Calle 54 N°41-20 del municipio de Medellín Antioquia, de propiedad de la sociedad **Clinica Veterinaria Caracas y Cía Ltda.**, cuya **Representante Legal** es la señora **Gilma Elena Patiño** identificada con cédula de ciudadanía N° 42'991.231, o quien haga sus veces, su **Administrador** el señor **Juan Carlos Grajales Patiño** titular de la cédula de ciudadanía N° 8.025.816 y su **Director Responsable** el señor **Luis Fernando Almazo Martinez** identificado con cédula de ciudadanía N° 7.628.580 y con tarjeta profesional N° T.P.13885.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 21550 de agosto 19 de 2011 se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° 21922 de septiembre 12 de 2011 contra la señora Gilma Elena Patiño, o quien haga sus veces, y los señores Juan Carlos Grajales Patiño y Luis Fernando Almazo Martinez en sus calidades de **Representante Legal, Administrador y Director Responsable** de la **Clinica Veterinaria Caracas**, por infringir los artículos 36 numeral 1, 86, 94 y 97 numerales 1 literales i) k) y 2 literal i) de la **Resolución 001478 de 2006**.

Dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándoles de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentaron los respectivos descargos dentro del término de ley.

Para resolver se tiene lo siguiente:

En las visitas realizadas a la **Clinica Veterinaria Caracas**, se pudo comprobar, de manera fehaciente, el manejo inadecuado de los **medicamentos de control especial**, ya que pudo evidenciarse que los medicamentos de control especial eran almacenados juntos con otro tipo de medicamentos, el libro no era bien diligenciado pues se encontraron enmendaduras y tachones, no eran enviados los informes de consumo mensualmente así como la relación de facturas y no era utilizado el recetario oficial emitido por Comvezcol.

Motivo por el cual en ambas visitas el manejo de los medicamentos de control especial fue **suspendido** como medida sanitaria de seguridad.

En tal sentido, es pertinente referirse al **artículo 36 de la Resolución 1478 de 2006** del Ministerio de la Protección Social, que en su numeral 1 establece que todos los solicitantes de inscripción ante la UAE, Fondo Nacional de Estupefacientes y/o Fondos Rotatorios de Estupefacientes deberán disponer de una infraestructura física debidamente adecuada que cuente con un *“Area de almacenamiento. Estará ubicada en un área debidamente adecuada y de dimensiones determinadas por el volumen de las actividades y/o procesos que realicen. Será independiente, diferenciada y señalada, debe permanecer limpia y ordenada”* así como también determina los *“Criterios de almacenamiento. Las sustancias y/o medicamentos sujetos a fiscalización se almacenarán de acuerdo con la clasificación farmacológica y orden alfabético. El almacenamiento de las sustancias sometidas a fiscalización y medicamentos de control especial debe mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad”*.

Igualmente, el artículo 86 de la misma disposición establece que:

“Los recetarios oficiales para la formulación de medicamentos de control especial tendrán un original, que quedará en el Establecimiento o Entidad que dispense, y dos copias, en las cuales se anotará que fue dispensado; una para el paciente y otra para el trámite administrativo pertinente”. (...).

A su vez la citada Resolución 1478 en el artículo 97 al determinar la graduación de las infracciones administrativas establece en el numeral 1º literales i) y k) como **Infracciones leves**:

i) No registrar los movimientos de sustancias sometidas a fiscalización y/o medicamentos que las contengan en los respectivos registros;

k) No conservar los medicamentos bajo las condiciones de almacenamiento exigidas por la UAE, Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de la Protección Social;

y en el numeral 2 literal i) como **Infracción grave**: i) Dispensar sin Recetario Oficial medicamentos sometidos a control especial. (Negrilla fuera de texto).

En relación a las condiciones higiénico locativas pudo observarse que el establecimiento no contaba con los elementos necesarios para medir las variables de temperatura ambiental y de humedad relativa

Además de lo anterior, resulta relevante para este despacho el hecho que en visita anterior efectuada el 12 de agosto de 2009 se encontraron las mismas irregularidades con el manejo de los medicamentos de control especial, en cuanto a el almacenamiento independiente, la presentación de los informes mensuales, la utilización del recetario oficial y los registros en el libro, motivo por el cual se dejaron requerimientos para dar cumplimiento a la normatividad sanitaria situación que no han acatado de acuerdo a lo evidenciado por los funcionarios los días 30 de Junio de 2010 y 14 de abril de 2011

ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS

Los implicados manifiestan dentro del escrito de descargos que luego de las visitas se dio cumplimiento a los requerimientos hechos por los funcionarios pero que *"al momento de estas visitas hubo que suspender el gasto de anestesia hasta nueva orden"*, que desconocían que se debían enviar los reportes en ceros cuando el establecimiento hubiera suspendido el manejo de los medicamentos de control y que tampoco se les había informado que se debía utilizar el recetario oficial de Comvezcol.

En relación al almacenamiento argumentan que los productos encontrados junto con los medicamentos de control especial es porque *"mantenemos un control más delicado y aparte de los productos del almacén esto para llevar un control más preciso de los fastos del personal médico de la clínica, y por esto es que se encontró en la visita el ciruphar junto con otros medicamentos de control especial para la clínica"*.

En relación a lo planteado por los implicados dentro de los descargos es preciso señalar que el artículo 9º del Código Civil Colombiano, establece que **"La ignorancia de la ley no sirve de excusa"**. Y en tal sentido, en uno de los múltiples pronunciamientos que sobre éste aspecto ha hecho la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena de marzo 30 de 1978, señaló que *"Excluír de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico"*. Se ha hecho ésta reseña legislativa para concluir que bajo ninguna circunstancia le asiste justificación alguna al implicado para pretender evadir su responsabilidad en los hechos.

Adicionalmente, la norma es clara en establecer la manera en la que deben estar almacenados los medicamentos de control especial y la forma en la que deben manejarse los mismos, como claramente se les indicó por lo que el hecho de haber suspendido la utilización de la anestesia dentro del establecimiento no es justificación para la manera en la que se estaban manejando este tipo de

medicamentos, teniendo en cuenta además que en repetidas oportunidades se dejaron requerimientos con el fin de que se diera estricto cumplimiento a la normatividad sanitaria que regula estos medicamentos.

Es de señalar que durante la visita, el administrador del establecimiento manifestó que el manejo de los medicamentos de control especial era responsabilidad del médico veterinario Luis Fernando Almazo y toda vez que, el motivo por el cual se adelantó la presente investigación corresponde a las irregularidades evidenciadas en el establecimiento, en cuanto al mal manejo de los medicamentos de control especial y a la renuencia al cumplimiento de los requerimientos dejados en las visitas anteriores, y no a la administración del mismo; resulta pertinente para este despacho **exonerar** de todo tipo de responsabilidad administrativa dentro de la presente investigación al señor Juan Carlos Grajales Patiño en su calidad de administrador del establecimiento investigado, por no haber incurrido en violación de las disposiciones sanitarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Decreto 677 de 1995.

Es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la sociedad la señora **Gilma Elena Patiño** identificada con cédula de ciudadanía N° 42'991.231, o quien haga sus veces, y al señor **Luis Fernando Almazo Martínez** identificado con cédula de ciudadanía N° 7.628.580 y con tarjeta profesional N° T.P.13885, en sus calidades de **Propietaria y Director Responsable** respectivamente de la **Clinica Veterinaria Caracas** ubicada en la Calle 54 N°41-20 del municipio de Medellín Antioquia, con **MULTAS** equivalentes a **TREINTA (30) Y QUINCE (15) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** al momento de regir la presente resolución respectivamente, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: **Exonerar** de todo tipo de responsabilidad administrativa dentro de la presente investigación al señor **Juan Carlos Grajales Patiño** identificado con cédula de ciudadanía N° 8.025.816, en su calidad de **administrador** de la **Clinica Veterinaria Caracas** ubicada en la Calle 54 N°41-20 del municipio de Medellín Antioquia, por las razones expuestas en apartes anteriores.

ARTÍCULO TERCERO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Los sancionados deberán asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 18 NOV 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaria Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 042822

18 NOV 2011

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FACTORES DE RIESGO
DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 26 de junio de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Droguería Marta Ines** ubicada en la Calle Principal Corregimiento Providencia del municipio de San Roque Antioquia, cuya **Propietaria y Directora Responsable** es la señora **María Eucaris Vasquez Marín** identificada con cédula de ciudadanía N° 22.024.989 y con Credencial de Expendedora de Drogas inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 2026.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 8231 de junio 03 de 2011 se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° 21418 de agosto 11 de 2011 contra la señora María Eucaris Vasquez Marín, en su calidad de **Propietaria y Directora Responsable** de la **Droguería Marta Ines**, por infringir los artículos 66, 68, 69, 72 y 73 del **Decreto 1950 de 1964**, artículo 77 parágrafos 1° y 2° del **Decreto 677 de 1995**, numerales 3.2. Literales g) e i), 3.3. Literal f), 3.6.5. y 5.3 Literal c) Capítulo II Título II, Inciso final numeral 2.1 Capítulo V Título I del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado mediante **Resolución 1403 de 2007**, artículo 11 parágrafo 3 y artículo 20 numeral 3 del **Decreto 2200 de 2005**.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a la señora **María Eucaris Vasquez Marín**, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual no presentó los respectivos descargos dentro del término de ley, dejando inactivo su derecho de defensa.

Para resolver se tiene lo siguiente:

El 18 de mayo de 2010 se recibe en la Secretaria Seccional de Salud y protección Social de Antioquia queja de la comunidad del corregimiento de Providencia del municipio de San Roque en donde se manifiesta *“preocupación por la calidad de los medicamentos, por el manejo y expendio en la Droguería Marta Inés, informando además que el establecimiento unido a una casa de habitación, que no tiene director responsable por lo que el establecimiento está en manos de personas que no tienen conocimiento y no cumplen con los requerimientos de la Secretaria seccional de Salud y protección Social de Antioquia”*. Información que fue verificada durante la visita realizada al establecimiento toda vez que se evidenciaron irregularidades que ponen en riesgo la salud de la población.

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas ciento seis (106) unidades de siete (07) medicamentos y productos farmacéuticos diferentes, tales como:

- **Medicamentos Prohibidos:** Vencidos, con pseudofedrina.
- **Medicamentos Fraudulentos:** Se evidenció que adquiría productos a proveedores no autorizados.

Estos productos fueron decomisados como medida sanitaria de seguridad, y se dejó copia del acta levantada con ocasión de la visita.

Al respecto, los párrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*"PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades públicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.*

*"PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA** o **VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS O ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos".*

Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2° párrafo 2, establece que MEDICAMENTO "es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado".

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un **Director Responsable** en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le de un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección, de buen manejo y cuidado en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdican mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la droguería Marta Ines.

Durante la visita se pudo evidenciar el incumplimiento del horario mínimo de ocho (8) horas diarias por la directora responsable y adicionalmente, no tenía exhibido el original del título, motivo por el cual el establecimiento fue **clausurado** como medida sanitaria de seguridad.

Es responsabilidad precisamente de quienes a ello se dedican, no sólo adquirir los

productos y medicamentos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización ya que lo que está de por medio es la salud pública, el bienestar colectivo y la propia vida de quienes requieren los medicamentos prescritos por sus médicos para el alivio o la cura de sus diversas dolencias o enfermedades.

Las **condiciones higiénico locativas** del establecimiento tampoco eran las adecuadas ya que se observaron las siguientes irregularidades:

- El establecimiento no era independiente, comunica con vivienda.
- Las áreas no estaban identificadas y señalizadas
- La ventilación era deficiente.
- Las instalaciones eléctricas eran inadecuadas, sin canalizar.
- No contaba con contrato para la disposición final de los residuos.
- El aviso exterior no coincidía con la información real del establecimiento.
- No contaba con los elementos necesarios: termómetros e higrómetro, para medir las variables de temperatura ambiental y humedad relativa.

En relación a los **procesos y procedimientos** del establecimiento no se tenían documentados los procesos y procedimientos que se realizan en el mismo, no contaba con actas de recepción ni se realizaba una recepción técnica y administrativa

Al respecto, este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***"implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen"***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que ***"toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"***.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la ***"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."*** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron,

entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *"la prevalencia del interés general"*, y *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios".

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Tener productos farmacéuticos prohibidos y fraudulentos, que incumplan Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, sin importar la cantidad que sea, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, en muchos de ellos ni siquiera se encuentra un solo medicamento en condición irregular, ni son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a la implicada que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **María Eucaris Vasquez Marín** identificada con cédula de ciudadanía N° 22.024.989 y con Credencial de Expendedora de Drogas inscrita en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el N° 2026, en sus calidades de **Propietaria y Directora Responsable** de la **Droguería Marta Ines** ubicada en la Calle Principal Corregimiento Providencia del municipio de San Roque Antioquia, con **MULTA** equivalentes a **TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** al momento de regir la presente resolución, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la implicada, haciéndole saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La sancionada deberá asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se le estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándole que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.



ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

18 NOV 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS

Director Administrativo Factores de Riesgo

Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 042823

18 NOV 2011

Por medio de la cual se impone una sanción

**El Director Administrativo de La Dirección Factores de Riesgo de La
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social De Antioquia**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 13 de agosto de 2009, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Droguería La Cita de su Salud** ubicada en la Calle La Cita del municipio de Yalí Antioquia, cuya **Propietario** es la señora **Blanca Nery Franco Alvarez** identificada con cédula de ciudadanía N° 32'513.239.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 8407 de junio 28 de 2011 se inició la

investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° 21772 de septiembre 02 de 2011 contra la señora Blanca Nery Franco Alvarez, y en sus calidades de **Propietaria de la Droguería La Cita de su Salud**, por infringir los artículos 68 y 72 del **Decreto 1950 de 1964**, artículos 69, 72 literales d) y e) y 77 parágrafos 1° y 2° del **Decreto 677 de 1995**, artículo 8 numeral 3 Literal b) de la **Resolución 1403 de 2007**, numeral 1.1. Capítulo II Título I, numerales 3.2. Literales d), e), i) y j), 3.6.5, **5, 5.3** Literal c) y 7.5 literal a) del Capítulo II Título II numerales 2.1y 2.2 Literal d) Capítulo V Título I del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado mediante **Resolución 1403 de 2007**, artículo 11 parágrafo 3 y artículo 20 numeral 3 del **Decreto 2200 de 2005** y artículo 54 literal d) del **Decreto 4725 del 2005**.

Que la señora **Blanca Nery Franco Alvarez**, quien no acudió a notificarse personalmente, fue notificada por edicto y no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas dos mil doscientas veintinueve (2.229) unidades de veintinueve (29) medicamentos y productos farmacéuticos diferentes, tales como:

- **Medicamentos Prohibidos:** Vencidos y medicamentos pertenecientes a entidades de seguridad social cuya venta o tenencia esta prohibida.
- **Medicamentos Fraudulentos:** Sin registro sanitario del INVIMA y se evidenció que adquiría productos a proveedores no autorizados.
- **Medicamentos Alterados:** Fuera de su empaque secundario
- **Medicamentos que Incumplían las Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques:** Sin fecha de vencimiento ni número de lote.

Todos estos productos fueron **decomisados** como **medida sanitaria de seguridad**, y se dejaron copias de las actas levantadas con ocasión de las visitas.

Al respecto, los parágrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*“PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades publicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.*

*“PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA** o **VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS O ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos”.*

Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2° parágrafo 2, establece que **MEDICAMENTO** “es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que

se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”.

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le de un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección, de buen manejo y cuidado en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdicen mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la Droguería La Cita de su Salud.

En la visita realizada a la droguería pudo evidenciarse la falta de Director Responsable por lo que el establecimiento fue **CLAUSURADO** como medida sanitaria de seguridad la cual fue levantada luego de ser aportado contrato de compraventa de la droguería, por el señor Osmar Darío Peláez quien solicitó el levantamiento de los sellos.

Es responsabilidad precisamente de quienes a ello se dedican, no sólo adquirir los productos y medicamentos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización ya que lo que está de por medio es la salud pública, el bienestar colectivo y la propia vida de quienes requieren los medicamentos prescritos por sus médicos para el alivio o la cura de sus diversas dolencias o enfermedades.

En cuanto a los dispositivos médicos sin registro sanitario, se les recuerda que dicho registro, es el Documento Público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en la normatividad sanitaria, por lo tanto los productos que no cuentan con éste y encontrados son fraudulentos y está prohibida su tenencia.

Con respecto a los medicamentos fuera de su empaque (“caja original”), se esta desconociendo con ello el literal d) del artículo 2º del Decreto 677 de 1995, que define como **medicamento alterado**: cuando el empaque no corresponda al autorizado o se hubiere sustraído del original, total o parcialmente y que medicamento no solo es su parte constitutiva sino que “...Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”, de acuerdo a la definición de éste en el artículo 2º del Decreto 677 de 1995.

Es importante resaltar que la información de la fecha de vencimiento y lote, la llevan en el empaque, rótulo y etiqueta y que los que estaban fuera del empaque secundario, al carecer de esta información son motivo de decomiso y además puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación, etc., de medicamentos.

En cuanto a las condiciones locativas se evidenció que:

- No tiene exhibido el horario de atención al público.
- Faltan estibas.
- Las áreas no se encuentran identificadas y señalizadas
- Las paredes y techos se encuentran deteriorados.
- No tiene contrato para la disposición final de residuos.
- El establecimiento es desorganizado y se encuentran elementos ajenos a su funcionamiento.
- Las estanterías se encuentran sucias lo cual compromete la calidad de los medicamentos.
- No cumple con el código de colores en recipientes y bolsas plásticas.
- Los basureros no cuentan bolsa plástica.
- No se miden las variables de temperatura y humedad relativa.

Al respecto, este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***"implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen"***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que *"toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"*.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *"la prevalencia del interés general"*, y *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo

legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios" (Negrilla fuera de texto).

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) Amonestación.
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Tener Productos Farmacéutico Prohibidos, Alterados, Fraudulentos, que incumplan Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, sin importar la cantidad que sea, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, en muchos de ellos ni siquiera se encuentra un solo medicamento en condición irregular, ni son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a la implicada que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos

señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener en un establecimiento farmacéutico medicamentos y productos en las condiciones en que se encontraron en la **Droguería La Cita de su Salud** del municipio de Yalí, **pone en riesgo y en grave peligro la salud pública** que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a los señores **Blanca Nery Franco Alvarez** identificada con cédula de ciudadanía N° 32'513.239, en su calidad de **Propietaria** de la **Droguería La Cita de su Salud** ubicada en la Calle La Cita del municipio de Yalí Antioquia, con **MULTA** equivalente a **SETENTA (70) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** al momento de imponer la sanción, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la implicada, haciéndole saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La sancionada deberá asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se le estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándole que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

16 NOV 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARIO DEL VALLE GARCÉS

Director Administrativo Factores de Riesgo

Secretaria Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 042896 DE 2011

(21 NOV 2011)

"Por medio de la cual se resuelve una petición"

EL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las conferidas por el Acuerdo 162 del 05 de octubre de 2011 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y,

CONSIDERANDO

A. Que el (la) señor (a) **MARTHA HELIANA RESTREPO MÁRQUEZ**, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 21.431.923, presentó solicitud para la aplicación del Acto Legislativo 04 de 2011, en las convocatorias en curso de la CNSC, al 7 de julio de 2011 en virtud de lo establecido en el Acuerdo 162 del 5 de octubre de 2011, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

B. Que los requisitos establecidos en el acuerdo 162 de la CNSC para la aplicación del Acto Legislativo 04 de 2011, que deben acreditarse son:

- "a) Que el empleo al que aspira como **servidor provisional**, NO corresponda a una vacante temporal. (negritas y subrayas fuera de texto).
- b) Que el aspirante se encontraba vinculado al 31 de diciembre de 2010 y al 07 de julio de 2011 en la misma entidad y en el mismo empleo en que se encuentra inscrito en la Convocatoria.
- c) Que el aspirante al 07 de julio de 2011 llevaba al menos cinco (5) años en ejercicio ininterrumpido en el mismo empleo en condición de provisional.
- d) Que el aspirante esté inscrito en la convocatoria de acuerdo con la copia de inscripción o del reporte de su estado en la Convocatoria, que anexó a su petición.
- e) Que el empleo se encuentre reportado a la oferta pública de empleos de carrera de la convocatoria

Los servidores con nombramiento en encargo inscritos en convocatorias en curso a la fecha de promulgación del Acto Legislativo, al empleo que ocupaban al 07 de julio de 2011 y que estaban desempeñándolo al 31 de diciembre de 2010 y en el que lleven al menos tres (3) años de ejercicio ininterrumpido, en el mismo empleo y en la misma entidad. Lo aquí señalado, sin perjuicio de la aplicación de las listas de elegibles proferidas y que adquirieron firmeza antes del 07 de julio de 2011, teniendo en cuenta que para los elegibles se constituyó un derecho cierto frente a las vacantes existentes al momento en que éstas cobraron firmeza.

Además, estos servidores deberán haber obtenido calificación definitiva de servicios sobresaliente en el período ordinario de evaluación del desempeño correspondiente al último año, ..."

En consecuencia, para solicitar la aplicación del Acto Legislativo, deberá acreditarse:

- a) Que el empleo al que aspira como **servidor en encargo**, NO corresponda a una vacante temporal. (negritas y subrayas fuera de texto).
- b) Que el aspirante se encontraba vinculado al 31 de diciembre de 2010 y al 07 de julio de 2011.
- c) Que el aspirante al 07 de julio de 2011 llevaba al menos tres (3) años de ejercicio ininterrumpido en el mismo empleo en condición de encargado.
- d) Que la calificación de servicios obtenida por el aspirante en el último año correspondiente al período ordinario de evaluación del desempeño sea sobresaliente. ...
- e) Que el aspirante esté inscrito en la convocatoria de acuerdo con la copia de inscripción o del reporte de su estado en la Convocatoria, que anexó a su petición.
- f) Que el empleo se encuentre reportado a la oferta pública de empleos de carrera de la convocatoria.

C. Que Analizada la hoja de vida del señor (a) **MARTHA HELIANA RESTREPO MÁRQUEZ**, se halló que **no reúne los requisitos** para ser beneficiario del Acto Legislativo 04 de 2011 en virtud de lo establecido en el Acuerdo 162 del 5 de octubre de 2001, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por las causales c) y d), como servidor provisional.

Por lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: No acceder a la solicitud presentada por el (la) señor (a) **MARTHA HELIANA RESTREPO MÁRQUEZ**, CC. 21.431.923, para ser beneficiario (a) de Acto Legislativo 04 de 2011, en virtud de lo establecido en el Acuerdo 162 del 5 de octubre de 2001, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues no cumple con los requisitos establecido en los numerales c) y d), como servidor provisional.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición en el efecto suspensivo, siempre y cuando se interponga dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO

Gobernador del Departamento de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 042897 DE 2011

(21 NOV 2011)

"Por medio de la cual se resuelve una petición"

EL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las conferidas por el Acuerdo 162 del 05 de octubre de 2011 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y,

CONSIDERANDO

A. Que el (la) señor (a) **JAIME ORLANDO CORREA QUIRÓZ**, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 3.498.732, presentó solicitud para la aplicación del Acto Legislativo 04 de 2011, en las convocatorias en curso de la CNSC, al 7 de julio de 2011 en virtud de lo establecido en el Acuerdo 162 del 5 de octubre de 2011, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

B. Que los requisitos establecidos en el acuerdo 162 de la CNSC para la aplicación del Acto Legislativo 04 de 2011, que deben acreditarse son:

"a) Que el empleo al que aspira como servidor provisional, NO corresponda a una vacante temporal. (negritas y subrayas fuera de texto).

b) Que el aspirante se encontraba vinculado al 31 de diciembre de 2010 y al 07 de julio de 2011 en la misma entidad y en el mismo empleo en que se encuentra inscrito en la Convocatoria.

c) Que el aspirante al 07 de julio de 2011 llevaba al menos cinco (5) años en ejercicio ininterrumpido en el mismo empleo en condición de provisional.



- d) Que el aspirante esté inscrito en la convocatoria de acuerdo con la copia de inscripción o del reporte de su estado en la Convocatoria, que anexó a su petición.
- e) Que el empleo se encuentre reportado a la oferta pública de empleos de carrera de la convocatoria

Los servidores con nombramiento en encargo inscritos en convocatorias en curso a la fecha de promulgación del Acto Legislativo, al empleo que ocupaban al 07 de julio de 2011 y que estaban desempeñándolo al 31 de diciembre de 2010 y en el que lleven al menos tres (3) años de ejercicio ininterrumpido, en el mismo empleo y en la misma entidad. Lo aquí señalado, sin perjuicio de la aplicación de las listas de elegibles proferidas y que adquirieron firmeza antes del 07 de julio de 2011, teniendo en cuenta que para los elegibles se constituyó un derecho cierto frente a las vacantes existentes al momento en que éstas cobraron firmeza.

Además, estos servidores deberán haber obtenido calificación definitiva de servicios sobresaliente en el período ordinario de evaluación del desempeño correspondiente al último año, ..."

En consecuencia, para solicitar la aplicación del Acto Legislativo, deberá acreditarse:

- a) Que el empleo al que aspira como servidor en encargo, NO corresponda a una vacante temporal. (negritas y subrayas fuera de texto).
- b) Que el aspirante se encontraba vinculado al 31 de diciembre de 2010 y al 07 de julio de 2011.
- c) Que el aspirante al 07 de julio de 2011 llevaba al menos tres (3) años de ejercicio ininterrumpido en el mismo empleo en condición de encargado.
- d) Que la calificación de servicios obtenida por el aspirante en el último año correspondiente al período ordinario de evaluación del desempeño sea sobresaliente. ...
- e) Que el aspirante esté inscrito en la convocatoria de acuerdo con la copia de inscripción o del reporte de su estado en la Convocatoria, que anexó a su petición.
- f) Que el empleo se encuentre reportado a la oferta pública de empleos de carrera de la convocatoria.

C. Que Analizada la hoja de vida del señor (a) **JAIME ORLANDO CORREA QUIRÓZ**, se halló que **no reúne los requisitos** para ser beneficiario del Acto Legislativo 04 de 2011 en virtud de lo establecido en el Acuerdo 162 del 5 de octubre de 2001, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la causal c), como servidor (a) provisional.

Por lo antes expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: No acceder a la solicitud presentada por el (la) señor (a) **JAIME ORLANDO CORREA QUIRÓZ**, CC. 3.498.732, para ser beneficiario (a) de Acto Legislativo 04 de 2011, en virtud de lo establecido en el Acuerdo 162 del 5 de octubre de 2001, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues no cumple con los requisitos establecido en el numeral c), como servidor (a) provisional.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición en el efecto suspensivo, siempre y cuando se interponga dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO

Gobernador del Departamento de Antioquia